



SOCIAL WATCH

I N F O R M E 2 0 0 9

VERSIÓN
ABREVIADA

Poner a trabajar las finanzas **PRIMERO LA GENTE**

MÁS DE SESENTA INFORMES DE LA SOCIEDAD CIVIL
DE TODO EL MUNDO MUESTRAN QUE LA ÚNICA
SALIDA PARA LA ACTUAL CRISIS ECOLÓGICA Y
ECONÓMICA ES INVERTIR EN LA GENTE.

UN INFORME CIUDADANO SOBRE EL PROGRESO EN LA ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA Y EL LOGRO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO

La versión completa del informe Social Watch 2009 incluye:

Voces que marcan la diferencia

Roberto Bissio

Primero la gente

Roberto Bissio

INFORMES TEMÁTICOS

Una respuesta a la crisis financiera y económica desde los derechos humanos

Aldo Caliari, Center of Concern

Igualdad de género y crisis financiera

Nancy Baroni, Canadian Feminist Alliance for International Action;

Mirjana Dokmanovic, Association Technology and Society,

Serbia and Women in Development Europe (WIDE);

Genoveva Tisheva, Bulgarian Gender Research Foundation

and Bulgarian-European Partnership Association;

Emily Sikazwe, Women for Change

La crisis mundial en el precio de los alimentos

Sophia Murphy, Institute for Agriculture and Trade Policy

Justicia para enfriar el planeta

Isagani Serrano, PRRM, Social Watch Filipinas

Desafíos energéticos para Europa

Elena Triffonova, Bulgarian-European Partnership Association

Las obligaciones de las empresas transnacionales frente a los derechos humanos y el papel de la sociedad civil

Jana Silverman, Social Watch;

Álvaro Orsatti, Confederación Sindical de Trabajadores y

Trabajadoras de las Américas

La crisis económica mundial y los países menos adelantados: preocupaciones ciudadanas

Arjun Karki, LDC Watch

Aumentan los desafíos de desarrollo debido a la crisis mundial: opción de políticas en la región árabe

Kinda Mohamadieh, Arab NGO Network for Development;

Oliver Pearce, Christian Aid

Respuesta europea a la crisis económica y financiera mundial

Mirjam van Reisen, Europe External Policy Advisors (EEPA);

Simon Stocker y *Louisa Vogiazides*, Eurostep

EL PROGRESO HACIA LAS METAS

Seguridad alimentaria

Escenario fragmentado

Educación

Se acentúan las diferencias

Información, ciencia y tecnología

El distanciamiento más acelerado

Asistencia al desarrollo

Cada vez más lejos de los compromisos asumidos

Agua y saneamiento

Se ensancha la brecha

Salud

Mejora desigual

Salud reproductiva

Marcada polarización

Ratificaciones de los convenios fundamentales de la OIT

Ratificaciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos

Cómo leer las tablas de Social Watch

Notas metodológicas: tablas temáticas

E informes nacionales de:

Alemania, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Benín, Birmania (Myanmar), Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chile, Chipre, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Ghana, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Iraq, Italia, Kenia, Líbano, Malasia, Malta, Marruecos, México, Moldova, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Palestina, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Centroafricana, República Checa, Rumania, Senegal, Serbia, Somalia, Tailandia, Tanzania, Uganda, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia

Voces que marcan la diferencia

Este Informe de Social Watch entra en imprenta en septiembre de 2009, un año después de que el Gobierno de Estados Unidos fracasara en su intento de rescatar de la bancarrota a Lehman Brothers. El colapso de esta banca de inversión global marcó el punto neurálgico de una crisis que comenzó en el epicentro de las finanzas globalizadas de Wall Street y se extendió rápidamente a las economías de la enorme mayoría de los países del mundo.

Siendo “crisis” la palabra clave del año, la pregunta que Social Watch formuló a su red de organizaciones nacionales de base para que estructuraran sus informes nacionales era obvia: ¿cuál es el impacto social y ambiental de la crisis? ¿Qué está haciendo su gobierno al respecto? ¿Cuáles son las propuestas desde la sociedad civil?

Cada coalición nacional de Social Watch, examinando la situación de su propio país, ha identificado diversas maneras en las que los efectos de la crisis se hacen sentir. Esas conclusiones son el núcleo de este informe y brindan la perspectiva de las personas que trabajan con y desde las bases.

El presente informe no fue realizado por encargo. Cada coalición nacional de Social Watch está compuesta por organizaciones y movimientos que, a lo largo de todo el año, trabajan en temas de desarrollo social. Sus conclusiones no pretenden agotarse en la investigación; son utilizadas para llamar la atención de las autoridades sobre los problemas y ayudan a la elaboración de políticas más equitativas, sensibles a los problemas de género y en favor de los pobres.

Al comentar sobre la crisis, los grupos nacionales de Social Watch lo hicieron a partir de sus prioridades y énfasis, e incluso en base a su propia definición de cuál es el alcance de la crisis. Para hacer posible el informe, cada coalición nacional recaudó sus propios fondos y definió sus métodos de consulta con las bases para recabar evidencias y validar sus conclusiones. No rehuyeron la crítica a las autoridades, políticas, elites o sistemas de gobernanza nacionales siempre que lo estimaron necesario. La manifestación de opiniones críticas ayuda a fortalecer los procesos democráticos. Pero aun cuando los informes encuentran mucho que se puede (y debe) mejorar internamente en cada país, estas conclusiones también señalan las limitaciones internacionales que no pueden ser solucionadas a nivel nacional.

La toma de decisiones a nivel internacional es poco democrática, tanto para la sociedad civil como para muchos gobiernos. Las organizaciones de la sociedad civil ni siquiera pueden asistir, en calidad de observadores, a la mayoría de los foros internacionales clave y, en muchos casos, esto también se aplica a los gobiernos de los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los dos grandes pilares de la gobernanza financiera mundial, son controlados por siete países, y Estados Unidos tiene poder de veto en ambas instituciones (como también la Unión Europea, si sus países miembro asumen una posición común).

En este sentido, la convocatoria a nivel de jefes de Estado de un “G-20”, una agrupación informal de las 22 economías del Norte y el Sur consideradas de “importancia sistémica”, es un bienvenido avance hacia el reconocimiento de la nueva realidad de la economía mundial. De todos modos, esto es insuficiente por dos principales motivos: en primer lugar, porque unos 170 países quedan fuera, como ha sucedido en las cumbres del G-20 en Washington (noviembre de 2008), Londres (abril de 2009) y Pittsburg (septiembre de 2009). Y en segundo lugar, porque el G-20 no tiene ningún peso institucional, ni estatus legal, ni responsabilidad, ni secretaría responsable de dar seguimiento a sus resoluciones, pero sí reglas ocultas para alcanzar una decisión en caso de que las negociaciones a puertas cerradas no alcancen un acuerdo.

Sin embargo, se ha esgrimido que la ventaja del G-20 consiste en que la reunión de un grupo reducido de líderes al más alto nivel es capaz de producir resultados significativos, en tanto que una reunión amplia, conducida de modo transparente, apenas podría generar discursos acalorados para consumo político y ningún acuerdo significativo. Lo que sucedió en los últimos doce meses, sin embargo, fue que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Doha en diciembre de 2008 y en Nueva York en junio de 2009, logró un consenso del “G-192” (el número total de miembros de las Naciones Unidas) que profundiza mucho más en su análisis de la crisis que cualquier otro documento acordado internacionalmente.

Social Watch fue activo participante en todas las audiencias convocadas por el Padre Miguel D'Escoto, presidente de la 63ª Sesión de la Asamblea General de ONU, y remitió sus recomendaciones a la comisión de expertos liderada por el economista Joseph Stiglitz que asesorase al más alto organismo internacional en sus deliberaciones sobre la crisis y sus impactos sobre el desarrollo. Social Watch organizó, junto con docenas de organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, la “Audiencia Popular sobre la Crisis” en Nueva York, evento que reunió a las víctimas locales de la crisis con activistas e investigadores de todo el mundo. Nuestra red también participó activamente en las mesas redondas que se desarrollaron durante la misma Conferencia de Alto Nivel en junio y, aun cuando solo algunas de nuestras recomendaciones quedaron plasmadas en el documento final, tuvimos ocasión de felicitar públicamente a los negociadores de los gobiernos por haber alcanzado un consenso que parecía imposible.

Ahora es el momento de poner en práctica esos acuerdos, de pasar de las palabras a la acción.

El porqué y el cómo llevar esto a cabo lo descubrirá el lector en este Informe 2009 de Social Watch. ■

ROBERTO BISSIO
Secretariado Internacional de Social Watch

Primero la gente

Roberto Bissio
Secretariado Internacional de Social Watch

La declaración de bancarrota del banco de inversiones Lehman Brothers en septiembre de 2008 es percibida por muchos como el momento de quiebre para una serie de colapsos del sistema bancario que se propagaron como un incendio forestal por las bolsas y mercados financieros de las economías más ricas del mundo. La palabra “crisis” ha sido desde entonces el centro de todas las noticias y discursos políticos. La Gran Depresión que sacudió al mundo a principios de los años 1930 es citada con frecuencia como el único precedente y el historiador Eric Hobsbawm comparó la caída de Wall Street con la del Muro de Berlín. En la opinión de quien es considerado el mayor historiador del siglo XX, “la economía capitalista de libre mercado desprovista de cualquier tipo de restricciones o controles (...) que capturó al mundo y sus gobiernos desde los años de Margaret Thatcher y el presidente Reagan (...) se está desmoronando ante nuestros ojos” de la misma manera en que lo hicieron las economías planificadas centralmente desde el estado de tipo soviético hace 20 años¹.

La polvareda aún no se ha asentado y mientras los bancos de inversiones con fuertes vínculos con el sistema político de Estados Unidos, como Goldman Sachs, ya han vuelto a tener ganancias y a recompensar a sus ejecutivos con bonos multimillonarios en dólares, el desempleo sigue creciendo en la mayoría de las llamadas economías “avanzadas” y recién ahora, un año después del terremoto ocurrido en el epicentro de las finanzas globales, la ola del tsunami está comenzando a llegar a las orillas más distantes. En Bolivia, por ejemplo, la coalición de Social Watch local describe en su contribución para este informe que “el país ha visto pasar un ciclo de crecimiento mundial [antes de la crisis] y no supo aprovechar el acentón para acompasar a ritmo propio [el desarrollo]. Ahora que la crisis global se profundiza, la economía boliviana apenas se enteró de que hubo auge, y ya lo mira de lejos”.

En este informe de Social Watch se incluyen las conclusiones de las organizaciones de la sociedad civil en más de 60 países. Se trata del primer informe global desde las bases sobre los impactos sociales de la crisis. Las agencias de Naciones Unidas y otras instituciones han producido esti-

maciones valiosas sobre los millones de empleos que se perderán en todo el mundo, la creciente pobreza e incluso el aumento de la mortalidad infantil debidos a la incapacidad de los mercados para solucionar los problemas que ellos mismos crearon (contrariamente al credo imperante hasta el año pasado). Pero esas estimaciones son inferencias realizadas a partir de agregados globales, y no el resultado de la observación directa sobre el terreno. La acumulación de conclusiones de países ricos y pobres de todos los continentes muestra semejanzas notables y también una diversidad de situaciones que enriquece el panorama disponible hasta ahora, lo revela aún más dramático y urge a los responsables de tomar las decisiones a implementar políticas que pongan por delante a las personas. No es sólo una cuestión de justicia social, sino también de sólida política económica, tal como queda de manifiesto en la breve descripción de los informes nacionales a continuación.

Víctimas inocentes

En las finanzas capitalistas, como en un casino, cuanto más arriesgadas son las apuestas más altas son las ganancias. Pero las apuestas arriesgadas también significan pérdidas frecuentes. En esa lógica, lo escandaloso no es la bancarrota de Lehman Brothers, sino la decisión del presidente estadounidense George W. Bush y su Secretario del Tesoro Hank Paulson de gastar miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para rescatar bancos y compañías de seguros en quiebra, como Goldman Sachs, del que Paulson era Director Ejecutivo antes de entrar a formar parte del gobierno. Cuando Yayi Boni, presidente de Benín, quien fue electo por su sólida reputación como banquero, se enteró de esa decisión, cuestionó públicamente la procedencia de los billones de dólares de los fondos de rescate y concluyó que los pobres terminarían pagando por la crisis. El informe de Bélgica concuerda: cuando las acciones de los bancos y las principales empresas del país colapsaron, el Gobierno fue al rescate de los bancos y proporcionó garantías de depósito. La crisis todavía provoca que el desempleo continúe incrementándose, mientras el costo del rescate bancario se hace sentir en el drástico aumento de la deuda pública, con graves repercusiones para la provisión de la seguridad social. En el propio Benín, la vibrante coalición de Social Watch local ha descubierto que, en sus esfuerzos por estimular la economía, el Estado compite con los pobres por los escasos materiales de construcción y las organizaciones de base se movilizan contra el aumento del costo de vida.

Muchos de los informes nacionales de Social Watch aportan datos de cómo las mujeres tienden a sufrir desproporcionadamente los efectos de

la crisis. En palabras de la coalición polaca, “el descenso de los ingresos familiares” tiene un impacto más significativo “entre las mujeres, ya que son ellas quienes tradicionalmente cargan con la mayor responsabilidad del bienestar de la familia (esto es verdad especialmente en los grupos de menores ingresos). (...) La crisis amplifica al sector gris (informal) de la economía polaca a medida que muchos empresarios, especialmente los pequeños, intentan minimizar los costos laborales y evitar la tributación y otros costos asociados con el empleo formal. (...) El crecimiento de la economía gris afecta a más mujeres que hombres, porque son ellas quienes suelen tener empleos con baja remuneración, especialmente en el sector de los servicios privados (por ej., en la venta minorista)”.

En Francia la crisis mundial ha tenido un impacto directo en la población, al igual que en todos los países desarrollados – que es donde la crisis comenzó. Los efectos más obvios son el aumento del desempleo y la exclusión social, “y hasta problemas de alimentación que sufren sectores de la sociedad que, no hace mucho, estaban en una situación cómoda” según el informe francés de Social Watch. Del mismo modo, la estrategia de gestión de la crisis del Gobierno alemán no incluye objetivos sociales o incluso ecológicos. Sus paquetes de estímulo y reducciones de impuestos son socialmente injustos; los despidos y aumento del número de trabajadores a tiempo parcial revelan la cara fea de la desregulación. La pobreza se vuelve “masiva” tanto en Europa Oriental como Occidental, informan las coaliciones de Social Watch de Portugal y Moldova.

En la República Checa, “la crisis económica mundial está haciendo descender el nivel de vida” principalmente debido al aumento del desempleo. La coalición checa de Social Watch cuestiona la cifra oficial de desempleo, porque omite las 178.000 personas consideradas buscadoras de empleo no activas; si se agregara este grupo la tasa de desempleo sería 50% más alta. Los trabajadores extranjeros, especialmente los asiáticos, son los que más sufren en la República Checa, pero también las coaliciones de Social Watch en Malta, Eslovaquia y Chipre informan sobre las crecientes dificultades para los extranjeros y hasta casos de xenofobia.

En el otro extremo, desde Filipinas, Marruecos, México, Nicaragua y muchas otras partes se informa sobre las dificultades económicas derivadas de la disminución de las remesas enviadas por los trabajadores en el exterior. En el caso de Egipto “la caída de las remesas y el regreso de emigrados amenazan a un mercado laboral mal preparado para absorberlos”. En El Salvador, “más de 300.000 familias son receptoras de dinero del

¹ Ver: “Socialism has failed. Now capitalism is bankrupt. So what comes next?” [El socialismo ha fracasado. Ahora el capitalismo está en quiebra. Entonces, ¿qué viene después?] por Eric Hobsbawm, publicado en *The Guardian* el 10 de abril de 2009. Disponible en: <www.guardian.co.uk>.

exterior, que sufraga gastos de alimentación, vestimenta y servicios básicos”. Los flujos de las remesas prácticamente no aumentaron en 2008 y se estima que comenzarán a disminuir en 2009.

La velocidad en la que los países se ven afectados por el tsunami de la crisis no está relacionada con su distancia física de Wall Street, por supuesto, sino con la forma en que su economía se vincula a las economías del epicentro. Por ejemplo, en Mozambique, que es uno de los países más pobres del mundo, el Banco Internacional de Mozambique (Millennium Bim) ha publicado un informe en el cual prevé que la economía nacional decrecerá en razón de que tanto los países donantes que financian más de la mitad el presupuesto nacional, así como los que realizan inversiones extranjeras directas, tendrán un crecimiento económico negativo. Social Watch Mozambique informa que han caído los precios de aluminio, tabaco, azúcar, té, castañas y langostinos. Los ingresos de las exportaciones se verán afectados y, a su vez, esto debilitará ciertas actividades que promovían el crecimiento económico y disminuirá la promoción del turismo. Con el 42% de su presupuesto financiado por la ayuda, Tanzania está en una situación similar. El informe de Social Watch francés muestra que, debido a la crisis y la incapacidad del país de generar nuevos recursos para la Ayuda Oficial al Desarrollo, esta ayuda se redujo drásticamente, por lo que Francia no cumplirá sus compromisos en esta área. Por el contrario, España ha reafirmado su compromiso de canalizar el 0,7% de su ingreso nacional hacia la AOD para 2012. Pero aun si todos los países donantes cumplieran con sus compromisos, los objetivos se expresan en porcentajes de la economía y, por lo tanto, los presupuestos de AOD tenderán a disminuir en tiempos de recesión.

Entre los países en desarrollo, cuanto mayor sea la vinculación con la economía globalizada, más grande y más rápido es el impacto. Por ejemplo, el impacto fue inmediato en México y Chile, dos países latinoamericanos vinculados estrechamente con la economía de Estados Unidos por medio de acuerdos de libre comercio e inversiones. El precio del cobre, la exportación principal de Chile, alcanzó su punto máximo en más de USD 4 por libra a mediados de 2008, pero cayó a USD 1,4 a fines de año. Sin embargo, el impacto más notable de la crisis, según el informe chileno de Social Watch, lo ha constituido la caída en los fondos de pensiones, cuyos recursos están colocados en activos financieros en Chile y en el exterior. A fines de 2008, el valor de los ahorros previsionales sufrió una pérdida de USD 27.000 millones, más del 26% de los fondos totales. Debido a esto, Chile es el país latinoamericano en el que se produjo la mayor pérdida de riqueza de los hogares. A pesar de las numerosas protestas de los afectados, no tuvieron

la misma suerte que los accionistas de los bancos grandes mundiales y nadie vino a rescatarlos ni se hizo nada para compensarlos.

La caída de los precios de las materias primas extendió la crisis a muchos países. En Uganda la coalición local de Social Watch estima que la crisis podría revertir los recientes avances sociales y hacer imposible el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Zambia sufre aun más que Chile la caída de los precios del cobre, del que el país es muy dependiente. La contribución zambiana al informe de Social Watch destaca con acierto que “a diferencia de los Estados Unidos y otros países que han respondido al colapso económico con nuevos fondos para bancos e industrias principales en quiebra, a fin de mantenerlos a flote, el presidente Rupiah Banda no tiene ningún recurso para distribuir”.

El informe de Ghana comenta sobre el mismo problema: “la cuestión que los ciudadanos están tratando de abordar es si el país debería concentrarse en la ayuda de la comunidad internacional para lidiar con la caída de la economía, o recurrir a iniciativas fiscales y monetarias duras”.

Como escribe el experto financiero brasileño Fernando Cardim en su análisis preparado para el informe de Social Watch local: “Aumentar los ingresos y la recaudación fiscal (...) es precisamente lo que intenta lograr el presidente Obama en Estados Unidos. Es también lo que ha defendido repetidamente desde 2007 Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Sin embargo, “el Fondo mismo se ha resistido a adoptar este punto de vista, como lo demuestran las condiciones impuestas a los países de Europa Central que fueron rescatados por el FMI”.

En el caso de Rumania, el informe nacional de Social Watch destaca que “el préstamo del FMI parece haberse contraído bajo presiones externas, principalmente para salvar los intereses de las compañías extranjeras en Rumania. No servirá para reembolsar la deuda externa del país, pero cubrirá las deudas de las filiales locales de los bancos extranjeros. De esta forma, se utilizarán los fondos públicos para reparar el daño hecho por el capital privado”.

En vez de reaccionar a las necesidades locales, el FMI fue a Rumania a consecuencia de “los reclamos desesperados del Gobierno austriaco para que el FMI y la UE intervinieran y rescataran sus bancos en Europa Oriental”. Los bancos austriacos habían prestado a la región una cantidad equivalente al 70% del PIB de Austria. Ahora, “el reembolso de un préstamo que representa el 40% del presupuesto anual de Rumania sólo será posible durante los próximos años mediante la disminución del nivel de vida de la población”.

En Hungría, se hizo necesario un rescate del FMI para evitar el colapso total de la economía y esto condujo a devaluación, aumentos impositivos y otras medidas impopulares y procíclicas, como el recorte de gastos. El primer ministro Ferenc Gyucsany fue obligado a dimitir en marzo de 2009. El nuevo gobierno planea recortar las jubilaciones, las bonificaciones del sector público y las asignaciones por maternidad, hipotecar la energía y los subsidios al transporte, y elevar la edad de jubilación.

Del mismo modo, en Serbia la presión del FMI para disminuir el déficit estatal condujo al Gobierno a anunciar en marzo de 2009 “la introducción de un sueldo de ‘solidaridad’ provisorio y un impuesto a las pensiones de 6% para los que ganan por encima de USD 170. (...) Esto generó descontento entre los trabajadores y jubilados, mientras que los sindicatos anunciaron protestas. Éstos sostienen que el impuesto de ‘solidaridad’ afectará a los más pobres, provocará una reducción de salarios, más desempleo y un aumento del sector informal, mientras que los ricos no serán afectados. De la noche a la mañana, el Gobierno revocó todo el plan de ahorros”. Según la coalición serbia de Social Watch, el Gobierno “se encontraba apasionado entre el miedo a las protestas sociales y la presión del FMI, y las siguientes semanas estuvieron marcadas por opiniones discordantes de los políticos, que anunciaban nuevos paquetes de medidas de ahorro por la tarde para revocarlas a la mañana siguiente”. El menú de nuevas ideas incluía reducir el número de ministros, aumentar los impuestos a las propiedades, introducir un impuesto a las facturas de los teléfonos móviles, la compra de automóviles nuevos y automóviles de lujo, prohibir el ingreso de nuevos empleados en el sector público, limitar los viajes de negocios al exterior y reducir las horas de trabajo. Sin embargo, los Watchers serbios subrayan que, si la recién adoptada Ley de Confiscación de la Propiedad Obtenida Dolosamente se implementa de forma efectiva, “el Estado podría recaudar USD 2.640 millones en un año, suma igual a la que Serbia está solicitando al FMI”.

En Bulgaria las ONG y los sindicatos no están de acuerdo en que la reducción de los gastos sociales sea aceptable en tiempos de crisis. “Cualquier otra reducción podría destruir la paz social del país”, advierte la coalición nacional de Social Watch. Aunque los expertos de las ONG apoyan el aumento de la proporción de inversión destinada a la infraestructura del transporte, critican duramente al Gobierno por no utilizar los fondos estructurales de la Unión Europea asignados a Bulgaria en sus dos primeros años como miembro pleno. “Hacia fines de 2008 sólo se había gastado 0,6% de los EUR 2.200 millones. La falta de capacidad

financiera, la excesiva burocracia y los procedimientos escasamente transparentes impidieron que los fondos lleguen a sus destinatarios”.

El entolecimiento puede ser dramático

Cuando comenzó la crisis financiera, algunos economistas aventuraron la hipótesis de la “desvinculación”, según la cual las economías emergentes permanecerían relativamente intocadas por la crisis financiera mundial debido a sus reservas sustanciales de divisas extranjeras, estados de cuentas corporativos sólidos y sectores bancarios relativamente saneados. Sin embargo, igual sintieron el impacto. Según Social Watch India, “es obvio que los pronósticos iniciales del Gobierno en cuanto a que el país saldría indemne demostraron poca visión de futuro” y el crecimiento económico cayó de un sólido 9,3% en 2007 a 7,3% en 2008. Para 2009 el FMI pronostica un crecimiento del 4,5%. Caídas similares ocurrieron en Vietnam, Perú y Camboya, que pasaron de tener cifras de crecimiento de dos dígitos al 5%.

Un crecimiento del 5% puede provocar la envidia de los Ministros de Hacienda de los países de la OCDE, ya que la mayoría trata de salir del crecimiento *negativo* (es decir, recesión), pero no debería ignorarse el punto de salida. El crecimiento del 5% anual en los países de ingresos bajos significa un aumento de menos de diez centavos por día para una persona común. Pero unos pocos centavos marcan una enorme diferencia cuando se es pobre. Según el ejemplo planteado por Social Watch Camboya, la reducción de la tasa de crecimiento a la mitad significa que “las personas que viven en torno al Tonle Sap, el lago más grande del país, (...) ya se habían endeudado para lograr llegar a fin de mes. En 2008 tuvieron que vender sus activos productivos y sacar a los niños de la escuela para ponerlos a trabajar”.

Crisis permanente

El término “crisis” se refiere a un momento decisivo, un tiempo inestable, pero para muchas de las coaliciones de Social Watch que remitieron su informe nacional, la crisis que sufren sus países viene de décadas atrás y no comenzó con el colapso de los mercados financieros. En la República Centroafricana, la pobreza aumenta en vez de disminuir desde 1990, con inestabilidad política y violencia que perjudica una economía de por sí débil.

Eritrea “ya estaba inmersa en un profundo caos propio” mucho antes de que se agudizara la crisis mundial, mientras en Nigeria la mayoría de las personas “ha vivido por mucho tiempo en una situación de colapso económico. La corrupción es generalizada, hay falta de electricidad en todo el país, la educación y la salud se encuentran en

condiciones deplorables y la lucha armada por el control de los recursos petroleros sigue siendo intensa”.

En Yemen, el informe de Social Watch local entiende que la ausencia de derechos es el origen de las crisis sucesivas desde 1990, con el 42% de la población bajo la línea de pobreza y una situación aún peor para las mujeres. En Birmania se vive una “crisis perpetua, ya sea económica, política, alimentaria o ambiental”, con un Gobierno que se muestra incapaz de apoyar a sus ciudadanos después del ciclón pero que gasta casi la mitad de su presupuesto en los militares.

En Nepal se espera que la crisis golpee pronto, añadiendo sus efectos “a otras crisis, relacionadas con el medio ambiente, la alimentación, la energía, las finanzas y la política” que han golpeado a la sociedad “durante mucho tiempo”.

En Bangladesh, el ciclón Sidr, además de dos inundaciones consecutivas, muestra la vulnerabilidad extrema de millones de personas amenazadas por el cambio climático. Una absoluta ausencia de autoridad gubernamental está en la raíz de los problemas de Somalia, mientras la ocupación extranjera es la preocupación principal en Palestina. También haciendo su aporte desde una situación de conflicto crítica, Social Watch Iraq decidió este año enfocar su informe en la situación de las mujeres. Sus conclusiones, sin embargo, tienen valor universal: el empoderamiento de la mujer requiere que exista “una cultura de igualdad de acceso y de oportunidades”, además de legislación adecuada.

Polarización

En marzo de 2009, en medio de la crisis y el debate político sobre cómo recortar gastos en Serbia, tuvo lugar una feria de automóviles en Belgrado. ¡Todos los modelos más caros se vendieron el primer día por un total de más de USD 2,6 millones!

La crisis exacerba la polarización en todas partes. El informe de Social Watch de Bahrein afirma que “cada vez hay más millonarios, la clase media se achica y la clase baja se empobrece”. La sensación de injusticia, más que la pobreza absoluta, ha llevado a “confrontaciones y tensiones entre los grupos empobrecidos y las fuerzas de seguridad”, sobre todo en los pueblos. “Debido a ello, el Banco Mundial ha bajado la clasificación de Bahrein en cuanto a estabilidad política”.

En Vietnam, citado frecuentemente como un modelo ejemplar de desarrollo que sacó a millones de personas de la pobreza, “el consumo del 20% más rico de la población representa el 43,3% del gasto total del país, mientras que el 80% restante gasta modestamente”.

Una polarización similar se describe en el informe de Social Watch de Honduras, donde la

confrontación entre ricos y pobres claramente es la raíz del golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, reavivando una práctica de “cambio de régimen” que América Latina parecía haber abandonado a favor de métodos democráticos desde hace dos décadas.

En la vecina Costa Rica, que por muchos años ha sido un oasis de paz y estabilidad constitucional en América Central, los Watchers locales advierten que si no se asumen los retos de la crisis “a partir del diálogo social (...), la persistencia de las soluciones tradicionales (asistencialismo y recorte de gasto público, así como disminución de derechos) se traducirán sin duda alguna en una mayor desigualdad y pobreza, y en el riesgo de convertir pobreza coyuntural por pérdida de ingresos en pobreza estructural, así como en la profundización de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas y las personas adultas mayores”.

El juego del avestruz

Según los Watchers keniatas, “en Kenia el Gobierno no quiere ver la realidad y hace como el avestruz, que entierra su cabeza en la arena. La élite gobernante sostiene que la crisis es circunstancial y que la economía nacional está suficientemente a salvo por la debilidad de sus lazos con el capital internacional”.

Situaciones similares se viven en muchos países. En Moldova, Social Watch informa que antes de las elecciones de abril de 2009 el Gobierno negó vehementemente que la crisis hubiera de afectar al país e intentó mantener artificialmente la situación económica. El Banco Mundial no fue tan optimista e incluyó a Moldova entre los países en desarrollo con más alto nivel de vulnerabilidad. Después de las elecciones, sin embargo, el presidente Voronin declaró, en una reunión con empresarios, miembros del Gobierno interino, parlamentarios y políticos, que “‘la crisis es un fuego, una catástrofe’. Los funcionarios gubernamentales explicaron que se minimizó la importancia de la crisis, antes de las elecciones, con la intención de ‘no crear pánico’”.

En otras situaciones, no sólo los políticos en funciones minimizaron la importancia de la crisis, sino que también ha sido una estrategia de algunos líderes de organizaciones sociales, temerosos de que el miedo a una catástrofe pudiera conducir a funcionarios con poder de decisión a aceptar demandas oportunistas de los privilegiados. Social Watch Bolivia relata que los empresarios bolivianos son parte de esta tendencia: la reacción del empresariado pasa por promover “negociaciones desiguales” que colocan el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, con el objetivo de reducir sus beneficios y salarios, junto con el incremento de los despidos.

En Eslovenia, los Watchers locales también denuncian a empleadores que abusan del miedo a la crisis y restringen los derechos de los trabajadores. En Guatemala, los mecanismos para paliar la crisis, como las cuotas de importación con arancel cero, beneficiaron sólo a un grupo importador, pero no a los consumidores.

En Paraguay, la coalición local de Social Watch informa que los primeros sectores en exigir mayor apoyo “fueron los hasta hoy beneficiados por las políticas neoliberales y de integración de mercados: agro-exportadores, industriales, importadores, y ejecutivos publicitarios”. Los productores de soja, por ejemplo, no sólo pretenden que el Gobierno cubra sus “pérdidas sino mantener el nivel de actividad y ganancias a través del subsidio público”. Ellos tuvieron ganancias extraordinarias en el ciclo anterior, en parte gracias a la especulación en el mercado a futuro de *commodities* agrícolas que acompañaron la promoción de biocombustibles en muchos países.

En Polonia la población “cree que los bancos manipulan el tipo de cambio a costa de los clientes. En la actualidad, la diferencia entre los valores de compra y venta puede llegar hasta el 12%; y ni siquiera la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor puede imponer restricciones a la tasa de cambio. Por lo tanto, se están formando grupos de consumidores a través de internet con el fin de adquirir moneda extranjera en cantidades mayoristas, con la esperanza de negociar el monto del *spread* y en ocasiones incluso renegociar las condiciones de los acuerdos crediticios”.

Después de asistir a un seminario organizado por la Red del Tercer Mundo sobre las respuestas asiáticas a la crisis, la coordinadora de cabildeo de Social Watch Natalia Cardona escribió que parece existir “una atmósfera defensiva entre los gobiernos de la región. Más que un enfoque proactivo y nuevo en relación al cambio del sistema financiero internacional, confían en viejas políticas para tratar de solucionar problemas económicos nuevos y graves”.

Social Watch Argentina halla que su gobierno está igualmente mal preparado para la magnitud de los desafíos planteados por la crisis, y la coalición brasileña cree que sus líderes confunden “la incapacidad para actuar con la prudencia financiera y fiscal”. En tiempos de recesión, “los ingresos fiscales se reducen mientras que aumentan los gastos de la seguridad social. Los déficits fiscales entonces aumentan, justamente debido a que los gobiernos no tuvieron la suficiente audacia para actuar en contra de la contracción de la economía. Es paradójico que al intentar parecer prudentes, los países se coloquen en una situación fiscal aún peor de lo que sería si los gobiernos hubieran actuado con decisión en apoyo de la demanda”.

Apoyar a los ya privilegiados

Además, no todos los intentos de estimular la economía resultan acertados o justos. Los Watchers canadienses creen que el “plan de estímulo económico cortoplacista [del gobierno] desatiende las necesidades de los miles de ciudadanos que soportan lo peor de la crisis. Los empleos creados por las inversiones públicas son para los hombres, mientras las mujeres obtienen empleos precarios o de tiempo parcial y, con frecuencia, son las primeras en ser despedidas”.

Ésas son casi las mismas palabras usadas por el informe de Social Watch tailandés: “Una de las medidas más polémicas fue la entrega por única vez de THB 2.000 (USD 57) en efectivo a empleados públicos y privados con ingresos menores a THB 14.000 (USD 397) por mes. Incluso quienes estaban habilitados a recibir los fondos criticaron de populismo descarado la política, sin considerarla un estímulo significativo. Por ejemplo, la enorme mayoría de los trabajadores en esta categoría pertenece al sector informal y, por lo tanto, no están habilitados a recibirla, lo cual plantea el problema de la discriminación de género, ya que la vasta mayoría de las mujeres trabaja en el sector informal”.

Mientras las economías occidentales inyectan nuevos fondos de rescate masivos en sus instituciones financieras, y en algunos casos nacionalizan de nuevo sus bancos, el Parlamento keniano legisla sobre la privatización de los pocos activos sociales estratégicos restantes a fin de proporcionar por única vez una inyección de ingresos al Gobierno, denuncia la coalición keniana de Social Watch. Entre las organizaciones en lista para ser privatizadas se encuentran: la Compañía de Generación de Electricidad de Kenia (Kengen), la Kenya Pipeline Company, las empresas estatales del azúcar, hoteles, bancos y otros.

En Líbano, tanto el Primer Ministro como el ministro de Hacienda han reconocido los impactos negativos que se esperan de la crisis mundial y la necesidad de proteger la economía nacional. Sin embargo, el análisis de Social Watch local concluye que las medidas que están implementando aceleran los procedimientos necesarios para que el país se afilie a la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que se traducirá en la liberalización de servicios y sectores productivos de la economía.

Del mismo modo, en Tailandia “para complementar su plan de estímulos, el Gobierno también trabaja en una importante reestructura regulatoria de los mercados financieros. Sin embargo, a diferencia de muchos países que establecieron mayores garantías para proteger a los consumidores y sus economías, Tailandia avanza hacia la fuerte desregulación y liberalización para incrementar el

papel del mercado de capitales en el desarrollo de la economía”. Los Watchers tailandeses temen que “esta iniciativa, dirigida por muchas de las mismas personas que participaron de la crisis financiera de 1997 buscando exclusivamente ganancias a corto plazo, allanará el camino a una nueva crisis apenas el país se recupere”.

Los Watchers de Malasia informan que el país, cuyo crecimiento económico depende en gran medida de sus exportaciones y que importa la mayor parte de sus alimentos, “deberá prepararse para años de dificultades económicas. Existe una fuerte caída en la producción industrial, el desempleo está por las nubes y los analistas advierten que la recesión venidera podría ser peor que la de 1997. El Gobierno recibió críticas por actuar demasiado tarde y por dedicarse a rescatar a las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil realizan protestas y foros públicos para concientizar al público acerca de las repercusiones negativas de estas crisis, especialmente con respecto a los sectores vulnerables de la sociedad”.

Esto es lo contrario de lo que sucede en Venezuela, donde la reducción de la pobreza es un objetivo principal del Gobierno, el cual desembolsa grandes cantidades de dinero a tal fin, aun cuando las políticas no siempre son tan transparentes como a los Watchers locales les gustaría.

Argelia, por otra parte, parece haber aprendido algunas lecciones de la crisis. En septiembre de 2008 Sid Saïd, dirigente de la Unión General de los Trabajadores Argelinos, anunció que el Gobierno se retractaba en lo atinente a la política del “todo puede ser privatizado”. El informe de Social Watch local estima que unas 220 empresas públicas, “destinadas inicialmente a una operación de privatización que sólo esperaba la aplicación de las medidas reglamentarias, fueron al final retiradas de la lista de las que debían venderse”. Además, el Gobierno “condonó las deudas contraídas por empresas viables [y encargó] la supervisión y seguimiento de estas medidas de saneamiento a un Grupo de Trabajo interministerial (Finanzas-Industria y promoción de las inversiones-PYME)”.

Invertir en la gente

Muchos ciudadanos en todo el mundo pueden compartir la conclusión de los Watchers peruanos: “en tiempos de bonanza se pide a los trabajadores paciencia para gozar de los beneficios del crecimiento, mientras que, durante las crisis” se espera que se ajusten sus cinturones. Pero eso no es justo y, según entienden ahora los economistas, ni siquiera funciona. Los paquetes de estímulo que dependen de las rebajas de impuestos a los ricos y de subsidiar a los grandes bancos y corpora-

ciones no produjeron los resultados esperados. Anticipando una recesión prolongada, los ricos y las clases medias tienden a ahorrar cualquier dinero adicional, en vez de gastarlo, mientras que los bancos, en vez de prestar el dinero del estímulo, lo usan para reconstruir sus activos.

Pero cuando los fondos se canalizan hacia los pobres se gasta inmediatamente. No porque tengan un mejor entendimiento de su papel como contribuyentes a la recuperación de la economía global, sino simplemente porque no tienen otra opción.

Por todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil exigen cosas similares de modos diferentes. En Marruecos, como informa la coalición de Social Watch local, “se han tomado diversas acciones colectivas, en particular, huelgas sectoriales (educación, salud, colectividades locales, etc.) así como una huelga general. Entre otros movimientos sociales conviene citar las distintas luchas impulsadas por las Coordinadoras contra la Carestía de Vida, así como por las Asociaciones Nacionales de Profesionales Desempleados. Se desplegaron varias estrategias de acción colectiva: sentadas, marchas populares espontáneas, días de movilización nacional contra la pobreza, etc. Las reivindicaciones se refieren al cese del alza de los precios, el mantenimiento de la Caja de Compensaciones, la aplicación de la escala móvil de los salarios, a la puesta a nivel de los servicios públicos y al cese de las privatizaciones de los controles de distribución de agua y electricidad”.

En Estados Unidos, donde comenzó la crisis, y donde el número de los desempleados aumentó a 13,1 millones (5,6 millones más que al principio de la recesión), el partido Republicano fue “castigado” por el electorado que eligió a Barack Obama con una plataforma de esperanza y cambio. Ahora, según el informe de los Watchers estadounidenses, “los movimientos a favor de los derechos humanos, trabajos ecológicos, comercio justo,

asistencia médica y vivienda están presentando propuestas innovadoras y aumentando sus demandas de un cambio verdadero y estructural. Estados Unidos no puede permitirse desperdiciar esta oportunidad”.

En Ghana, Social Watch exige que, para “impulsar la agricultura y contribuir a la creación de empleo, al crecimiento económico y al bienestar general de la población, los agricultores necesitan apoyo para invertir en insumos, fertilizantes, capacitación y acceso a mercados”. Una demanda similar proviene de Senegal, el país más dependiente de la importación de alimentos de África Occidental, donde la sociedad civil propone “un retorno a la agricultura tradicional, debidamente incentivada y apoyada por el Estado”.

“Un aumento real de salarios debería ser el estímulo” es el resumen de lo que Social Watch propone en Bulgaria. Y en Filipinas “definitivamente se impone crear un paquete de estímulo pero, a diferencia del propuesto por el Gobierno, debería estar basado en una estrategia nacional clara que esté sujeta a derecho, a favor de los pobres, y sustentable. Debería priorizar la seguridad alimentaria, la creación de empleos fortaleciendo las empresas locales para beneficiar a las mujeres y hombres trabajadores, así como la inversión en proyectos de infraestructura ecológicos y a favor de los pobres (por ejemplo, la construcción de una red de sistemas de riego, la electrificación de pueblos apartados y el desarrollo de energía limpia), así como la extensión de la seguridad social y económica para los pobres y los desempleados. Finalmente, debe considerarse seriamente la renegociación de la deuda pública de modo que el grueso de los ingresos del país se destine a cubrir las necesidades elementales y urgentes de las personas en vez de ponerse al servicio de la deuda”.

En Tailandia, Social Watch trabaja en favor de una amplia alianza similar a la que concluyó en la

“Constitución Popular” de 1997, luego de la crisis financiera del sudeste asiático.

En Perú los Watchers enfatizan que “para afrontar las consecuencias perniciosas de la crisis, es imprescindible fortalecer la demanda interna, lo que implica aumentar el consumo de los trabajadores y proteger la producción nacional, además de suspender los Tratados de Libre Comercio (TLC), que generan una innecesaria apertura del mercado peruano en tiempos en que los mercados internacionales se encuentran en contracción”. La coalición de Social Watch mexicana también quiere una revisión del Tratado de Libre Comercio: el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas – en una carta del 16 de abril de 2009 dirigida a Barack Obama – propone “iniciar un diálogo del más alto nivel, en donde se aborden los temas de la agenda para la urgente renegociación del TLCAN y la salvaguarda de los derechos laborales, sociales y humanos de los ciudadanos de la región, que pasaría por construir un Fondo de Compensación Asimétrica para Norteamérica, negociar un acuerdo binacional sobre el tema migratorio y firmar un acuerdo para impulsar el Tratado para el Desarrollo Económico y Social de Norteamérica”.

Los Watchers italianos argumentan que “en respuesta a la crisis, cada vez más propietarios de cuentas bancarias en Italia están incursionando en el mundo de las finanzas éticas. Al cliente que apoya las finanzas éticas le importa cómo se utiliza su dinero, pero también que su banco no quiebre. Es así que muchos bancos en la actualidad están redoblando sus esfuerzos por mejorar su reputación. Volver al mandato original del sistema bancario de sostener la economía real debe constituir un punto de referencia constante en la búsqueda de salidas a la crisis”. Su conclusión tiene validez en todo el mundo: las palabras clave deberían ser “luchar contra la pobreza y redistribuir los recursos”. ■

Audiencia Popular sobre la Crisis



Panel sobre Derechos Indígenas.

El 20 de junio de 2009, en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Nueva York, la iniciativa de la Audiencia Popular sobre la Crisis reunió a activistas de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y grupos de base a nivel local, nacional e internacional para analizar las consecuencias sociales y ambientales de la crisis financiera y económica en hombres y mujeres, trabajadores o desempleados, de todo el mundo. Durante el evento, activistas por los derechos sociales, económicos, de género, laborales y ambientales ofrecieron testimonios sobre cómo la crisis afecta a las comunidades locales, desde Sudán hasta San Salvador y el sur del Bronx.

Este foro fue también una oportunidad para que líderes de la sociedad civil compartieran ideas y experiencias sobre cómo construir un movimiento mundial con raíces locales que pueda incidir en la creación de un nuevo sistema económico basado en los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental.

La Audiencia Popular sobre la Crisis se llevó a cabo en el contexto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica y su

Impacto en el Desarrollo, el primer foro realmente multilateral convocado para abordar los impactos sociales del actual colapso financiero. El orador principal de la Audiencia Popular fue el Padre Miguel D'Escoto Brockmann, presidente de la 63ª Sesión de la Asamblea General de la ONU, quien agradeció el apoyo de la sociedad civil a las soluciones de la crisis que están tomando forma en el corazón de la ONU y exhortó a los participantes "a inyectar un nuevo espíritu de responsabilidad y solidaridad" hacia la gente que está sufriendo los efectos de la crisis de manera desproporcionada. El evento concluyó con un llamamiento del Coordinador de Social Watch, Roberto Bissio, en favor de una reforma de la actual arquitectura financiera mundial que ayude a sacar a la gente de la pobreza, en lugar de reforzar las desigualdades económicas y sociales existentes tanto dentro como a través de las fronteras.

En las siguientes páginas usted podrá leer intervenciones clave de participantes en esta actividad, junto con algunos testimonios sobre el impacto de la crisis en la gente común que la red de Social Watch recogió en países del Sur. ■



Miguel D'Escoto Brockmann en la Audiencia Popular.

* Organizaciones adherentes a la Audiencia Popular sobre la Crisis: Social Watch, Eurostep, LDC Watch, Institute for Policy Studies, Global Policy Forum, Center of Concern, Red-DESC, Institute for Agriculture and Trade Policy, Global-Local Links Project, Jubilee USA Network, Jubilee South, GCAP Feminist Task Force, Alliance for Responsible Trade, Women's Environment and Development Organization, Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas, Servicio de Enlace de Naciones Unidas con Organizaciones No Gubernamentales, Global Action on Aging, Latindadd, US Human Rights Network, CONGO Social Development Committee, Sub-Committee on the Eradication of Poverty, Hemispheric Social Alliance, Women's Working Group on Financing for Development, Medical Mission Sisters International, World Federation of United Nations Associations, International Youth and Student Movement for the United Nations, Enlazando Alternativas, Transnational Institute, Our World Is Not For Sale Network. Videos de la Audiencia Popular sobre la Crisis están disponibles en el canal de Social Watch en YouTube: <www.youtube.com/SocWatch>.

“ Sin duda, la crisis financiera ha afectado a Benín. Hoy en día muchos hogares solo pueden permitirse una comida al día. Aumentaron los matrimonios forzosos porque las familias venden a sus hijas como forma de hacer frente a la crisis. Esto ha echado por tierra los avances realizados para eliminar la violencia contra las mujeres. Aumentan los impactos de la crisis en relación al género; por ejemplo, está disminuyendo la matriculación de niñas en la escuela y la presencia de mujeres en el mercado de trabajo formal. Las mujeres son las primeras en perder sus empleos, y a menudo deben encargarse del cuidado de sus familias sin ayuda social alguna”.

Sonon Blanche (Social Watch Benín)

“ El Gobierno búlgaro recién admitió que el país estaba siendo afectado por la crisis en febrero de este año. A la fecha, 44.000 personas (96% de las cuales son mujeres) perdieron sus empleos debido a la crisis. Muchas de las industrias afectadas – como la de la vestimenta, el calzado, los servicios gastronómicos y la administración pública – tienen personal mayoritariamente femenino. La crisis también está teniendo su impacto en la violencia contra las mujeres. En general, en mi ciudad se presentan ante la justicia, en promedio, entre 17 y 19 casos por año; en lo que va de éste ya se presentaron 42 casos. En muchos casos los hombres abandonan a sus mujeres e hijos cuando es despedida de su trabajo; esas familias ahora deben sobrevivir con EUR 50 o menos que reciben como seguro de desempleo. Muchas de las mujeres entrevistadas habían sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo y tenían problemas para encontrar empleo en el sector formal”.

Milena Kadieva (Gender Research Foundation, Bulgaria)

“ El 69% de los sudaneses vive bajo la línea de pobreza, especialmente las mujeres que trabajan en el sector agrícola. En los últimos años mejoraron los servicios de salud, pero los pobres todavía sufren debido al aumento del precio de los alimentos. La sociedad civil sudanesa reclama más financiación para el desarrollo, pero desde una perspectiva multidimensional, no sólo económica, que permita mejorar efectivamente la calidad de vida de toda la población. El desarrollo tiene que ser estratégico y debe incluir la participación de las mujeres a nivel de base”.

Niemat Kuku (Gender Research and Training Center, Sudan)

“ Los afroamericanos y los indígenas tienen una historia común de explotación y conquista y están sufriendo los impactos de la crisis de manera desproporcionada. Nuestro imperio estadounidense actual se construyó sobre el llamado sueño estadounidense, pero vemos que también se usó tierra robada y trabajo robado para construir este país, el más rico que el mundo haya visto jamás. Desde el principio, las instituciones financieras ayudaron e instigaron a los especuladores que procuraban construir el imperio por cualquier medio a su alcance. Debemos rechazar la teología neoliberal y construir teorías teológicas más progresistas”.

Jean Rice (Picture the Homeless, Nueva York)

“ En Perú, no podemos hablar de derechos cuando algo tan horrible acaba de suceder en el Amazonas. ¿De qué tipo de derechos estamos hablando cuando el Gobierno de Perú viola los tratados firmados? Los pueblos indígenas saben cómo trabajar con la selva y la protegen porque la valoran; estos conceptos se transmiten de generación en generación. Esto se trastoca cuando las compañías transnacionales vienen a explotar y destruir este equilibrio delicado, convirtiendo a la selva en hormigón. El Amazonas fue declarado recientemente el pulmón del mundo. ¿Qué pasaría si lo llenáramos de rascacielos? Cuando decimos no a las compañías transnacionales, tiene lugar una contienda. Esta batalla que tiene lugar hoy en Perú, y mañana será en África y Asia”.

Washington Bolívar (líder indígena peruano)

“ Las leyes laborales de Estados Unidos no están a la altura de las normas de la OIT. Debemos recuperar la capacidad organizativa de los trabajadores de este país y es necesaria la aprobación de leyes democráticas a nivel del Congreso para devolver el poder al movimiento de los trabajadores. Con la crisis financiera la gente compra menos y paga menos impuestos sobre las ventas, así que hubo recortes de trabajo masivos tanto en el sector público como en el privado. Muchos sindicatos abrieron sus contratos y están renegociando para recortar los salarios. Por ejemplo, los United Auto Workers abrieron sus contratos y devolvieron mucho dinero, pero aún así sigue habiendo una gran cantidad de despidos. Las decisiones relativas a la economía no deberían tomarse de acuerdo a los intereses de un grupo selecto de propietarios de las corporaciones, sino teniendo en consideración las necesidades de los trabajadores”.

Jose Schiffino (NYC Labor Council for Latin American Advancement)

“ El derecho humano fundamental a la educación ha recibido los impactos de la crisis, especialmente para las niñas y jóvenes que, como resultado, no son enviadas a la escuela. Es importante recordar que la educación es un derecho humano obligatorio, no limitado por razones de edad o género, y debe ser accesible para todos. Los estados deben realizar acciones afirmativas y positivas para superar la desigualdad en la educación. Las estadísticas muestran que todavía hay millones de personas analfabetas, dos tercios de los cuales son mujeres. ¿Cómo es que podemos tener tecnologías de la información y computadores, pero aún hay personas analfabetas? Además de ser un derecho humano, desde una perspectiva económica, la inversión en la educación contribuye al crecimiento económico. Los condicionamientos actuales del FMI exigen a los países el congelamiento de la inversión en educación; esto debería ser cuestionado. Los DESC, especialmente la educación, deberían ser el núcleo de cualquier paradigma de desarrollo”.

Marcela Ballara (Consejo Internacional de Educación para Adultos, Chile)

“ En Colombia hay cerca de 84 tribus indígenas con 64 lenguas bien diferenciadas, que viven en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela, Perú, y Brasil, precisamente donde se encuentran las reservas de recursos naturales más preciadas. Luchamos para defender nuestro territorio y por la preservación de nuestra cultura. Como consecuencia de esta lucha, más de 1.400 de nuestros líderes han sido asesinados desde los años 1970. Ahora mismo, muchas regiones indígenas están militarizadas y las que no lo están, tienen fuerzas paramilitares presentes. El Gobierno está tratando de desplazar nuestras comunidades para poder negociar con compañías transnacionales la explotación de los recursos naturales – como la madera o el petróleo – de esas zonas. Los pueblos indígenas de Colombia se oponen a los acuerdos de libre comercio porque estos tratados provocan un mayor desplazamiento de nuestras comunidades y, en lugar de abrir los mercados, sólo aumentan la frontera del poder de Estados Unidos”.

Jesús Avirama (Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia)

“ La actual crisis es global, por lo que las políticas diseñadas para terminar con ella deben ser también globales pero vinculadas con los movimientos locales. Creemos que los paquetes de estímulo deberían invertirse en cosas como una infraestructura ecológica y social, que permita la creación de trabajo ecológico, un reconocimiento de los impactos desproporcionados de la crisis en las trabajadoras y la recuperación de la economía de cuidado. Este tipo de políticas se encuentran detalladas en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT. La ONU es el único lugar en donde los países que sufren el peso más grande de la crisis pueden tener una voz representativa. El movimiento de los trabajadores está trabajando en el marco de la ONU para difundir la Agenda del Trabajo Decente y Empleos Ecológicos. No se trata sólo de aumentar la ayuda al desarrollo y ser un poco más generosos – como a algunos países industrializados les gustaría. Es necesaria la transformación social. La instituciones multilaterales deben reformarse en forma sistemática y se necesitan mecanismos específicos para asegurar que tendremos soluciones duraderas a la crisis económica y financiera”.

Gemma Adaba (Confederación Sindical Internacional)

“ En Kenia empezamos a ver los impactos de la crisis hacia fines de 2008: se redujo el turismo y siguió un aumento del desempleo. Además, muchos keniatas dependen de las remesas provenientes de Estados Unidos, que cayeron drásticamente. Debido a la crisis, aumenta el número de familias que no pueden permitirse enviar a sus hijos e hijas a la escuela. Los inversores extranjeros están retirando sus proyectos del país. Mucha de la tierra está sin cultivar y ha habido escasez de agua en el último año. Todos estos factores, combinados con la gran desigualdad de ingresos y la corrupción que venían de antes, son la receta para el desastre que sufren la economía y la población de Kenia”.

Edward Oyugi (*SODNET, Kenya*)

“ Vemos como los trabajadores mayores siguen trabajando, aun cuando les duelen las piernas o tienen artritis, porque no pueden permitirse el lujo de jubilarse. Muchos de ellos hipotecaron sus viviendas y ahora las están perdiendo por las ejecuciones, al no poder pagar las altas tasas de interés. Otros están apoyando a sus hijos adultos o sus nietos que han sido despedidos. El ataque a las pensiones es un fenómeno mundial. Para solucionar este problema, la ONU debe comenzar a trabajar pronto en una convención de derechos humanos que trate las necesidades de los adultos mayores, para que en el futuro las personas no tengan temor de la vejez”.

Suzanne Paul (*Global Action on Aging, Nueva York*)

“ Los impactos de la crisis se manifiestan en los despidos masivos en bancos extranjeros, tales como el Banco BBVA, el Santander y el HSBC. A los trabajadores nos han quitado las reivindicaciones que hemos tenido. Sobre los deudores el impacto también es bastante grande, ya lo estamos viendo. Les están quitando sus viviendas cuando no pueden pagar. Lo hacen utilizando cuerpos militares del Estado que son para la seguridad, no para dejar en la calle a una pobre y humilde persona que tiene una vivienda y que no ha podido pagar”.

Janio Romero (*Dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, Colombia*)

“ Tres millones de personas en Nueva York padecen inseguridad alimentaria y, desde el comienzo de la crisis financiera en 2008, aumentó el consumo de alimentos baratos e insalubres. En muchos barrios de Brooklyn y el Bronx hay pocos supermercados con alimentos frescos. Una solución a este problema es la Agricultura Sostenida por la Comunidad, que acerca las granjas familiares, que producen alimentos orgánicos, a los consumidores, posibilitando así el acceso urbano a los alimentos saludables”.

Nadia Johnson (*WEDO y Just Food, Nueva York*)

“ Esta crisis no es sólo financiera sino sistémica. La respuesta debe basarse en los derechos humanos y la solidaridad; eso es lo que estamos tratando de promover en Bolivia. Debemos volver a la Madre Tierra – que nuestras comunidades indígenas llaman Pachamama – a fin de renovar nuestra sociedad. Como parte de esta renovación, Bolivia y Ecuador están trabajando para construir una nueva arquitectura financiera. Ya no participan en los tribunales de solución de contiendas internacionales como el Centro Internacional para la Conciliación de Disputas de Inversión que utilizan los países ricos para castigar a los más pobres”.

Elysa Peredo (*Alianza Social Hemisférica y Fundación Solon, Bolivia*)

“ Debemos formar una coalición de vigilancia internacional para monitorear lo que está pasando con los paquetes de estímulo, y ser capaces de dar respuestas rápidas si los gobiernos no utilizan estos dineros adecuadamente. Para terminar con la crisis, debemos elaborar enfoques comerciales y financieros basados en derechos, sobre todo, para reconstruir las redes de seguridad en el Norte y en el Sur. No queremos simplemente “retocar” el modelo económico para arreglarlo, sino reconstruirlo completamente. Para intentar conseguirlo, debemos aprovechar momentos políticos como el de la Conferencia de la ONU o el Foro Social Mundial, a fin de reunir a las personas y los movimientos sociales en este tiempo crucial”.

Tanya Dawkins (*Global-Local Links Project, Miami*)

“ En El Salvador, ya hace años que nos enfrentamos a los impactos del cambio climático: sufrimos inundaciones, sequías, huracanes, la seca de los principales ríos y el colapso de las comunidades. Cada año los costos materiales son altos, como también lo es la pérdida de vidas humanas y la emigración de nuestra gente, especialmente la juventud. Debemos trabajar en pos de una nueva era en la que el desarrollo se mida por el bienestar de la humanidad y el de la Madre Tierra, y no sólo por las riquezas materiales”.

Marta Benavides (Grupo de Trabajo Feminista de GCAP, El Salvador)

“ Cuando observamos los sistemas de bienestar y protección social, la capacidad de los Estados Miembros de la UE para abordar la creciente demanda de seguridad social varía considerablemente. En algunos casos, tenemos un aumento de los beneficios de desempleo, extensión de la cobertura por desempleo como también beneficios sociales, rebajas o exenciones impositivas para grupos específicos, entre ellos, los pensionistas. Por otro lado, otros Estados están recortando los beneficios. Hungría redujo los subsidios, los salarios del sector privado, y canceló los planes de gastos jubilatorios; y en Finlandia también se espera una reducción del gasto de los servicios sociales. Para contrarrestar los efectos en el mercado de trabajo, algunos países también están tratando de instaurar políticas de empleo proactivas al mantener a los trabajadores mediante tiempo flexible, pero, a pesar de estos esfuerzos, los efectos siguen siendo muy drásticos”.

Verena Winkler (Eurostep, Belgium)

“ Aunque los países industrializados del Norte son los principales responsables de las emisiones de efecto invernadero que provocan el cambio climático, especialmente medido per cápita, los países del Sur y, en particular, los pobres y las mujeres, son los que cargan con el mayor peso de los efectos ambientales adversos del cambio climático y sus impactos socioeconómicos. Algunos de estos efectos son el desplazamiento de las poblaciones que viven en zonas costeras bajas; la pérdida de las fuentes de sustento; inseguridad alimentaria; y la reducción del acceso al agua. Desde la perspectiva de la deuda ecológica, los países ricos e industrializados no sólo tienen la responsabilidad de reducir drásticamente las emisiones de gas de efecto invernadero, sino que también tienen la obligación ética y moral de brindar financiamiento compensatorio y reparador a los países en desarrollo para que puedan costear los esfuerzos de adaptación y alivio del cambio climático”.

Athena Peralta (Consejo Mundial de Iglesias)

“ Comencé a trabajar en una importante productora española de cine y publicidad, que abrió una sucursal aquí en Argentina en el 2007. Cuando estalló la crisis, todo empezó a complicarse. El trabajo disminuyó muchísimo, y pasamos hasta un mes sin filmar. En enero me avisaron que me iban a despedir. Recibí la indemnización correspondiente y comencé a buscar trabajo. Desde entonces y hasta ahora, no conseguí nada digno. Lo poco que hay son trabajos prácticamente esclavos de 8 o 9 horas, por sueldos indignos. A mi ya no me quedan muchos ahorros, y vivo sola en un departamento que alquilo, así que tengo que conseguir algo urgente. ¿Qué voy a hacer si no?”

Joven trabajadora de Buenos Aires

● INFORME NACIONAL

■ GUATEMALA

País rico, pueblo pobre



La crisis alimentaria recurrente que vive el país, con 121 de los 333 municipios que lo componen sumidos en la hambruna, hacen imprescindible la intervención estructural en el campo. Terminar con el desplazamiento de las comunidades campesinas, permitiéndoles ser dueños de sus tierras, permitirá hacer más equitativa la tenencia y volver a la autosuficiencia alimentaria. Para ello, es urgente revertir el actual modelo feudal de producción agrícola e impostergable aplicar la prometida Reforma Agraria Integral.

Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala
CONGCOOP

Zully Morales
Helmer Velásquez

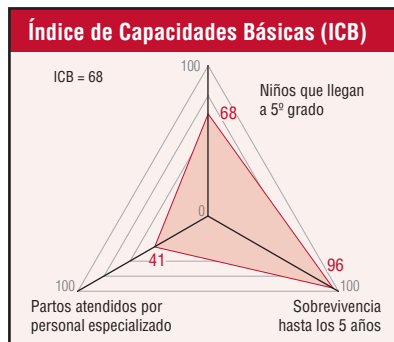
En Guatemala, menos del 2% de los productores posee casi el 57% de las tierras productivas. De los 18.937 km² aptos para el cultivo del maíz, 7.235 km² – en propiedades privadas de gran extensión – se encuentran sub-utilizados, cubiertos de arbustos, matorrales, pastos cultivados y pastos naturales o yerbazales. Este hecho, sumado a las políticas de ajuste estructural y la apertura comercial de los años 1980, ha provocado que Guatemala pase, de ser un país alimentariamente autosuficiente, a importar el 70% de sus alimentos.

Desigualdad estructural en el agro

La crisis alimentaria mundial se evidenció con más intensidad en Guatemala en el último semestre de 2007, lo que ha motivado una profunda reflexión acerca de los escasos avances en la lucha contra el hambre y la pobreza. Las acciones estatales diseñadas para cumplir con el ODM 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), venía consolidando una tendencia levemente positiva. Sin embargo se considera que debido a la actual crisis alimentaria, el cumplimiento de este objetivo se ve seriamente amenazado.

El Programa Mundial de Alimentos Guatemala estima que la pobreza y la pobreza extrema abarcan a más de la mitad de la población, aproximadamente seis de trece millones de habitantes han caído bajo la línea de pobreza (56,4% en pobreza y 19,7 % en pobreza extrema), el índice subió entre 2008 y 2009, en 5,4 y 4,5 puntos respectivamente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estimó el incremento, entre el 2007 y 2008, en 700.000 nuevos pobres. Un millón trescientos mil hogares pobres se ubican en el campo, 51% de ellos carece de tierra o posee menos de una hectárea.

El salario mínimo para el trabajador en el campo y la ciudad equivale a USD 6,50 por día. Sin embargo, según estimación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, en el campo esto no se cumple y el campesino recibe, en realidad, entre USD 3 y USD 5 al día por un jornal de trabajo de 8 a 10 horas, dependiendo el lugar y el tipo de cultivo. La pobreza se concentra especialmente en la población indígena y campesina. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006 evidencia que

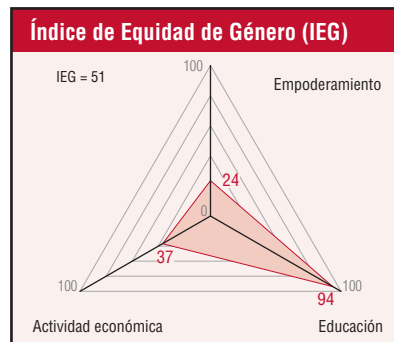


se consolida la tendencia de que la pobreza general (quienes viven con menos de USD 2 al día) es inclusive el doble para la población indígena que para lo no indígena¹. En cuanto a la pobreza extrema (quienes viven con menos de USD 1 al día), la situación es mucho más grave, pues es tres veces mayor que para la población no indígena. Durante el primer semestre de 2008, los precios de las mercancías que integran la Canasta Básica Alimentaria han experimentado un fuerte incremento que ha motivado que las personas de más bajos recursos restrinjan sus niveles de consumo. Esta situación ha alcanzado e impactado a la capa media.

Desarticulación del aparato productivo

Hasta los años 1970 el aparato público agropecuario, que brindaba servicios de extensión, crédito, dotación de tierra, investigación y transferencia tecnológica al campesino y al pequeño productor, promovía programas y proyectos de fomento al cultivo de los granos básicos, la protección boscosa y la producción pecuaria. Esto, combinado con la no importación de alimentos, mantuvo al país como agente productor de sus propios alimentos. El ajuste estructural determinó el cierre final a los servicios de extensión para principios del siglo XXI, desmantelando el aparato público agrícola, que pasó de tener 18.000 trabajadores a 1.200.

Como una acción paralela se dio en concesión a la "iniciativa privada" la administración de los silos nacionales (almacenamiento de granos básicos), dejando al país sin reservas alimentarias para el caso de catástrofes o tiempos de carencia. Como el Estado



dejó además de intervenir en el comercio de granos y se abrieron las fronteras a los granos producidos en el norte del continente a precios subsidiados, el aparato productivo nacional ha sucumbido. Una de las consecuencias más funestas es que 49% de los niños y niñas padecen desnutrición crónica y 24% de la población en general está desnutrida, lo que genera un atraso en prácticamente todos los indicadores vinculados al desarrollo fisiológico del individuo

La importancia del maíz

En el altiplano guatemalteco, (región en donde coincide hasta un 90% de población indígena e incluye las zonas más pobres del país), el 100% de la población consume maíz en su dieta diaria², con un promedio de 310 gramos *per cápita*, 110 kilogramos anuales para un consumo nacional de casi 3 millones de toneladas, lo cual nos provoca un déficit de alrededor de 1,5 millones de toneladas que suplimos con compras en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos de América, por más de USD 73 millones para el 2002.

La dependencia internacional de los granos provocó que, entre enero 2006 y enero 2009, los precios se incrementaran 62 % para el maíz amarillo, 70% para el arroz y 39% para la harina de trigo. Sin embargo, pese a que bajaron los precios internacionales en 2007 y 2008, en Guatemala al día de hoy, con excepción del precio del arroz, que volvió a niveles del año 2006, se mantienen los mismos precios que se ajustaron al precio internacional en su pico más alto.

¹ La ENCOVI 2006 define la Pobreza Extrema como el nivel en que se encuentran las personas que no alcanzan a cubrir el costo mínimo de alimentos.

² De acuerdo al *Popol Wuj* – libro sagrado de los Mayas – “De mazorcas amarillas y de mazorcas blancas se hizo su cuerpo, con masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre, únicamente masa de maíz se utilizó en la carne de nuestros padres”.

Nuevas amenazas para la población rural

Desde la reforma a la ley de minería de 1996, realizada a instancias del Banco Mundial, esta industria ha ido en aumento. Así, 17 departamentos del país son objeto de exploración y/o explotación minera. La Industria turística amenaza la propiedad campesina e indígena en el norte y sur del país. La urbanización y construcción de polos comerciales desplazan tierra rural, expulsando a sus pobladores y debilitando la capacidad productiva, especialmente de alimentos. La ganadería extensiva desgasta la tierra productiva y deforesta enormes extensiones, expulsando a campesinos e indígenas, sea con argumentos “legales” sea por presión armada. Incluso sucede en las llamadas áreas protegidas (para la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y recursos naturales), en connivencia con la burocracia del sector.

Se promueve ahora la instalación y ensanchamiento de mega monocultivos agrícolas orientados a la exportación, tales como la caña de azúcar, la palma africana y el piñón, que implícitamente expulsan a la población campesina del campo. La superficie sembrada con caña ocupaba un 6% del total en 1995 y 11% en 2007. El crecimiento anual promedio del área para siembra de caña entre 1990 y 2005 fue del 3,6%, mientras que, sólo entre 2005 y 2007, se incrementó un 17,7%. La Gremial de Aceites estimó para 2012, 150 mil hectáreas sembradas, con una inversión de USD 32,5 millones para compra de tierras que implícitamente expulsan a la población campesina del campo, la que fácilmente ahora pueden ser rebasadas.

Estas nuevas extensiones para la exportación devastan amplias zonas de cultivo alimentario y expulsan diariamente a cientos de familias campesinas, ya que además no generan empleo masivo. El rompimiento de los patrones culturales de la población expulsada provoca no solamente pobreza económica, sino social, cultural y espiritual, sino también desesperanza y violencia.

El narcotráfico es una nueva amenaza, algunas veces aparejada a la ganadería extensiva, que cuenta con la protección de fuerzas del Estado para expulsar campesinos y operar en sus tierras. Las familias campesinas están indefensas frente a las presiones de compra del narcotráfico y del latifundio motocultivador.

Respuestas del Estado

Dentro de las políticas y acciones que plantea el Gobierno en el marco de su Programa de Emergencia y Recuperación Económica, destacan una política fiscal contracíclica, una de protección social y otras políticas sectoriales prioritarias (desarrollo rural, programas de agricultura competitiva ampliada, desarrollo Agrícola y Asistencia alimentaria y sostenibilidad de los Recursos Naturales y fortalecimiento del arrendamiento de tierras).

Se insiste en mantener, a cualquier precio, la estabilidad macroeconómica. Esto implica reservas internacionales altas, bajos salarios, atracción de industrias vía eliminación de impuestos, entre otras medidas. El paradigma fundamental, para el Estado y los sectores oligárquicos, es ensanchar la banda de tratados de libre comercio. Dos de ellos son considerados los más importantes: El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que lleva ya tres años de vigencia y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (en negociación). Ninguno de los dos esquemas propone líneas de beneficio al pequeño productor.

Por otro lado el Gobierno ha implementado programas de transferencias monetarias y bolsas solidarias, que generan un cambio cualitativo en la formación de capital humano – que tendría mayor impacto si, además, se establecieran políticas de desarrollo rural, fiscal y se mejorara la institucionalidad del Estado. Estas medidas, así como el desarrollo de modelos internacionales adaptados a la realidad nacional están en boga en varios países de la región.

Uno de los mecanismos gubernamentales para paliar la crisis fue la ampliación de contingentes de importación con arancel cero para productos como el maíz amarillo, harina de trigo y arroz corriente. Sin embargo, la estructura oligopólica de la importación de alimentos al país provocó que solo uno de los grupos importadores, el Grupo Buena, obtuviera el 82% de las cuotas de importación. Esto, que no condujo a bajar los precios, se redujo en la práctica en un subsidio a esta empresa que no traslada al consumidor los aranceles no pagados.

Por otra parte, el déficit fiscal se cubre prioritariamente con deuda externa e interna; no existen posibilidades de una reforma fiscal. El 20% de los impuestos son directos y el 80% indirectos. No se cumple con la promesa del Gobierno de iniciar un proceso de reforma fiscal que revierta el modelo. La proyectada reforma, en el marco de esta crisis, se ha reducido a las que benefician el ciclo económico macro y los programas asistenciales para la población en extrema pobreza.

Para el agro, hay programas asistenciales de arrendamiento de tierra; no así para el acceso en propiedad y el crédito campesino. El nuevo Gobierno ha incrementado los desalojos forzados a campesinos (50 al 31 de marzo 2009), lo cual ha generado inestabilidad y descontento en las organizaciones indígenas y campesinas que esperaban la aprobación e implementación de una prometida Política Agraria de Desarrollo Rural. El liderazgo comunitario está siendo cooptado por el Gobierno y las transnacionales extractivas, que generan su propio movimiento social paralelo, de corte clientelista, financiando a discutibles representantes de las bases sociales. Esto ha provocado una sustitución del liderazgo tradicional por el financiado y enfrentamientos entre las organizaciones campesinas de base. A ello se suma

la criminalización y persecución de los dirigentes campesinos que luchan por acceder a tierra para producir sus alimentos.

Alternativas sociales

De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, “la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana”. Es decir que todos los guatemaltecos tienen derecho a acceder a la propiedad. A esos efectos, “la propiedad en casos concretos podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas”. La desnutrición, la pobreza y pobreza extrema, el desempleo y ahora la profundización de la crisis alimentaria recurrente tienen su origen en la incapacidad de la población de proveerse los medios de sustento, al carecer de activos para tal fin, especialmente la tierra. Es este un claro caso de utilidad y necesidad pública comprobada; es decir, se trata de una propuesta enmarcada en el ordenamiento jurídico nacional.

La agricultura es una estrategia de salida para el desarrollo y es necesario romper con el modelo feudal de producción. La equitativa distribución de la tierra es una estrategia idónea para fomentar el empleo rural e incrementar la productividad en el campo que apareje el crecimiento de la economía y la capacidad de previsión y provisión alimentaria. La reforma agraria es impostergable. Se trata de un instrumento de paz social y gobernabilidad que pondrá fin a los conflictos propiciados por la usurpación de la tierra indígena y campesina y evitará la depredación boscosa, al tiempo que hará emerger amplios sectores con capacidad productiva y de inversión. A partir de ella, las generaciones contarán con más y mejores capacidades para su auto desarrollo y se incrementará la capacidad de consumo, lo cual dinamizará la cadena productiva³. ■

3 Con datos y análisis de la Coordinación de ONG y Cooperativas, a través de sus dos Institutos de Análisis, Instituto de Estudios para la Democracia en formación y el Instituto de Estudios Agrarios y Desarrollo Rural. Guatemala, 2009.

Índice de Capacidades Básicas (ICB) e Índice de Equidad de Género (IEG)

ICB

El Índice de Capacidades Básicas es un índice-resumen, desarrollado por Social Watch¹, que compara y clasifica a los países según su progreso en materia de desarrollo social. Fue pensado como una herramienta útil para monitorear la evolución de los indicadores básicos y efectuar comparaciones entre y dentro de los países. El ICB evalúa la situación en que las sociedades nacionales se encuentran en relación a algunas capacidades básicas mínimas que representan condiciones de arranque indispensables para garantizar a las personas una adecuada calidad de vida.

El índice identifica situaciones de pobreza a partir de tres indicadores: sobrevivencia hasta los 5 años, porcentaje de niños que llegan a quinto grado y porcentaje de partos atendidos por personal especializado. Estos indicadores expresan diferentes dimensiones abordadas por los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente (educación, salud infantil y salud reproductiva).

Por otra parte, a diferencia de otros indicadores de pobreza, como los utilizados por el Banco Mundial – que toman en cuenta el número de personas que viven con menos de uno o dos dólares diarios – o la clasificación desarrollada por el PNUD basada en el Índice de Desarrollo Humano – que combina cifras de ingreso con indicadores de salud y educación –, el ICB, basado en la última información disponible para cada país, es más fácil de construir y puede ser aplicado a nivel subnacional y municipal sin necesidad de recurrir a costosas encuestas de hogares, como lo requieren los índices basados en el ingreso.

Al no usar el ingreso como indicador, el ICB – consecuente con una definición de pobreza basada en el nivel de desarrollo de las capacidades de la

persona y la mayor o menor posibilidad de ejercicio y goce de sus derechos humanos – ha demostrado estar altamente correlacionado con la medición de otras capacidades humanas relativas al desarrollo social de los países.

Mediante este índice se puede asignar un valor a cada país y, luego, compararlo con otros o evaluar su propia evolución en el tiempo. Los indicadores del ICB llegan a su máximo nivel posible cuando todas las mujeres reciben asistencia especializada durante el parto, cuando ningún niño o niña deja de ir a la escuela hasta completar quinto grado y cuando la mortalidad infantil se reduce a la expresión mínima posible de menos de cinco muertes de menores de cinco años por cada mil nacidos vivos. Estos indicadores se asocian estrechamente a capacidades que los integrantes de una sociedad deben tener y que se refuerzan mutuamente para posibilitar un mayor desarrollo individual y colectivo. Refieren, en especial, a aquellas capacidades que logran incorporar sus miembros más jóvenes, lo que potencia el desarrollo futuro de los países.

Vale aclarar que un valor de ICB cercano a 100 *no implica necesariamente un nivel elevado* de desarrollo social. Apenas significa que el país logró la cobertura universal de los *requisitos esenciales mínimos* para poder avanzar hacia un mejor bienestar. Se trata de un punto de partida, no de llegada.

IEG

Social Watch ha desarrollado el Índice de Equidad de Género con el propósito de volver visibles y medibles las situaciones de inequidad de género, así como su evolución en el tiempo, en los diferentes países. El IEG se basa en información disponible y comparable a nivel internacional y permite posicionar y clasificar países de acuerdo a una selección de indicadores relevantes a

la inequidad de género en las dimensiones educación, participación económica y empoderamiento.

El IEG permite la comparación entre países de manera ágil, a partir de una lectura directa e intuible. A los efectos de la medición se han establecido relaciones de proporcionalidad, o razones de sexos, que permiten inferir la estructura de oportunidades relacionadas con la inequidad de género.

El índice mide la brecha entre mujeres y varones, no su bienestar. Así, por ejemplo, un país en el que los jóvenes de ambos sexos tienen igual acceso a los estudios universitarios recibe un valor 100 en este punto, y un país en que tanto las niñas como los niños se vean igualmente imposibilitados de completar la educación primaria también alcanzaría valor 100. Esto no implica que la calidad de la educación sea adecuada sino que, en ese caso, las niñas no padecen de inequidad de participación.

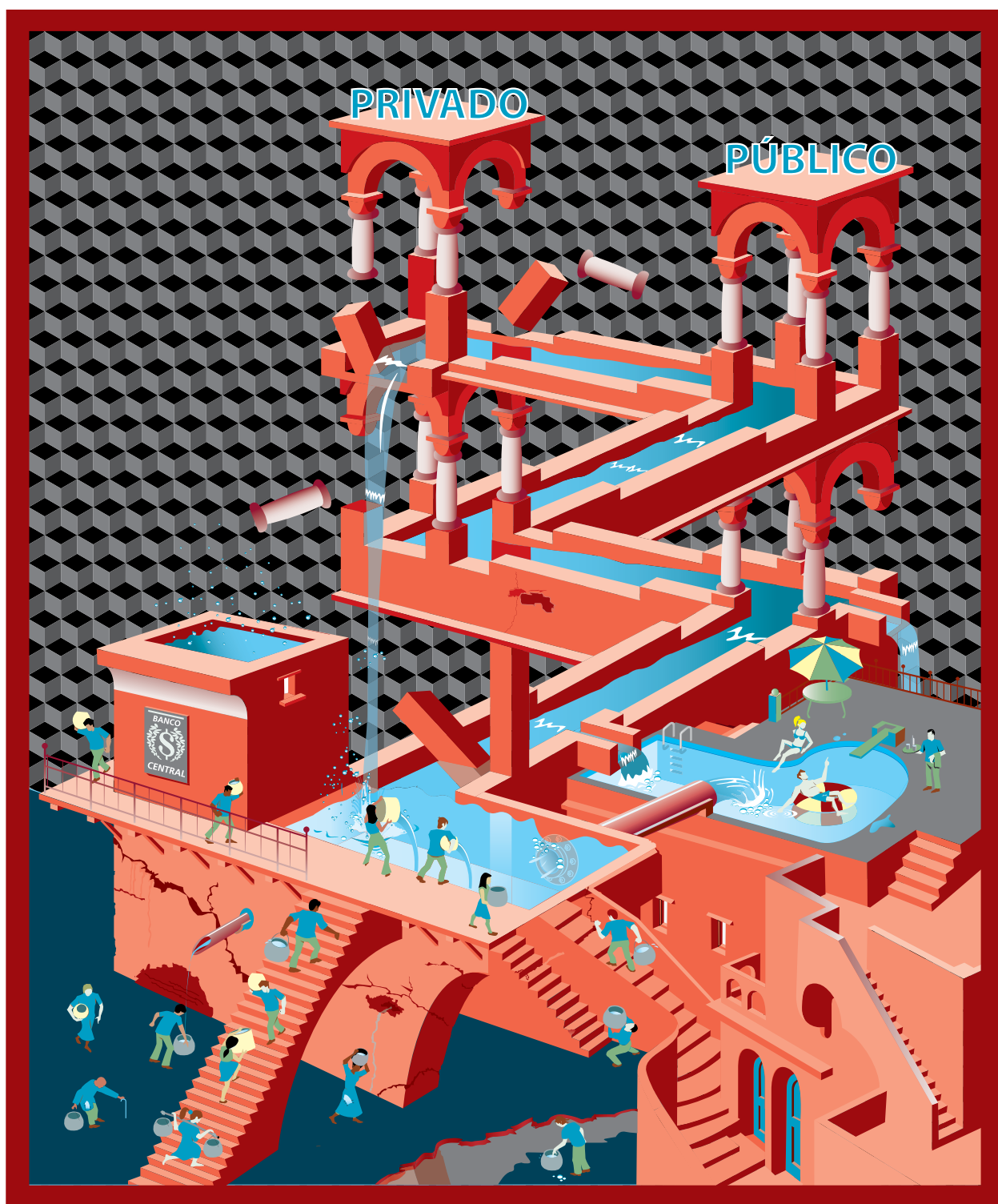
Su forma de cálculo responde a la necesidad de reflejar toda situación desfavorable a las mujeres. Por ello, ante la presencia de una relación proporcional desventajosa para las mujeres en comparación con los hombres, al IEG no le es dable alcanzar su valor máximo (100 puntos). Así, el valor final alcanzado depende del grado de inequidad negativa para las mujeres en un país o región determinada (reflejándola de forma inversamente proporcional: a mayor inequidad menor valor y viceversa).

Independientemente de que existan inequidades positivas para las mujeres, ningún indicador puede superar los 100 puntos (equidad perfecta en la participación)². Esta característica asimétrica determina que el IEG no pueda ni deba ser leído como porcentaje de participación de la población en relaciones de género, ya que la participación proporcional puede ser finalmente muy diferente si en alguno de los indicadores resultó favorable a las mujeres. ■

1 El ICB se originó en el Índice de Calidad de Vida desarrollado por la organización no gubernamental Action for Economic Reforms-Philippines, derivado de la Medida de Pobreza de Capacidades propuesta por el Profesor Amartya Sen y popularizada por el Índice de Desarrollo Humano del PNUD.

2 Se divide la participación relativa de las mujeres en una determinada situación social (por ejemplo "profesionales universitarios", que es uno de los cuatro indicadores de la dimensión Empoderamiento) por la participación relativa de los hombres. La razón obtenida se multiplica por 100. Si el valor obtenido es superior a 100 – cuando la participación femenina es superior a la masculina – se toma 100 como valor para evitar que participaciones relativas favorables a las mujeres en situaciones particulares escondan, en el valor final del índice, participaciones negativas en otras.

Una fallida arquitectura financiera... y cómo construir una nueva



Las finanzas se explican generalmente a través de metáforas líquidas: “flujos” de dinero, “derrame” hacia los pobres de los beneficios del crecimiento, “goteo” del capital desde los países al paraíso fiscal...

En un primer vistazo a esta construcción, la mayoría verá una cascada, así como la mayoría de los residentes de los países ricos piensa que un enorme caudal de sus contribuciones fiscales es dirigido a los países pobres bajo forma de asistencia, préstamos, beneficios comerciales y cancelaciones de deuda. Pero el agua de la cascada no llega siquiera a los pobres... En lugar de ello, es desviada y – contra toda lógica – fluye hacia arriba en vez de hacia abajo.

En 2006, Social Watch utilizó esta ilustración inspirada en la famosa “Cascada”, litografía de MC Escher, como una metáfora de la arquitectura financiera global. Esta estructura destaca a las instituciones de Bretton Woods (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional - FMI), a pesar de que hayan fracasado en alcanzar los objetivos para los que fueron creadas: asegurar estabilidad financiera, pleno empleo y desarrollo. Sosteníamos entonces que un mecanismo que moviliza el capital desde donde es escaso (los países de bajos y medianos ingresos) hacia donde es abundante es “imposible, tanto en el sentido de poco práctico como de intolerable” y que la arquitectura financiera internacional “debe ser urgentemente rediseñada”. Dos años más tarde, el sistema financiero internacional colapsó,

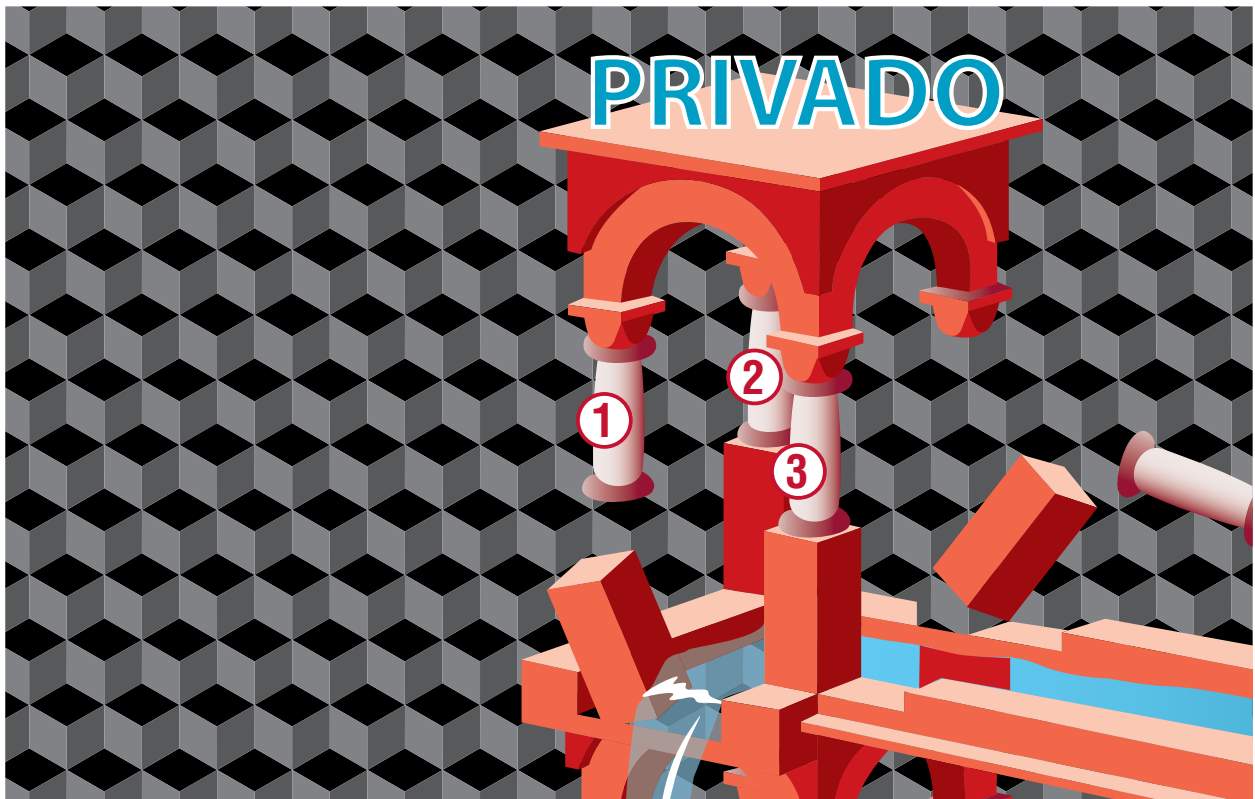


las fuentes de crédito se secaron y la recesión se expandió como una pandemia desde las economías más ricas hasta las más pobres.

La necesidad de una reforma sustancial es ahora ampliamente reconocida, pero aún se necesita lograr un entendimiento común sobre qué falló, antes de acordar un plan de acción para una nueva arquitectura financiera. Por otra parte, existe consenso sobre la inmediata necesidad de compensar la decreciente actividad del sector privado y de los mercados fallidos con “paquetes” de incentivos. En el mundo se han gastado más de 10 billones de dólares en subvenciones o recortes fiscales que benefician a

corporaciones, bancos y personas ricas, pero éstos no han logrado renovar el crédito ni estimular el gasto contra-cíclico.

Los bancos son reacios a prestar dinero a empresas de futuro incierto, al tiempo que los consumidores prefieren ahorrar en lugar de gastar. Pero la gente que vive en la pobreza, ya sea en países ricos o en desarrollo, gastará cada uno de los centavos que reciba. Como los pobres no tienen la opción de aplazar el consumo, el mejor plan de incentivo para abordar la crisis económica mundial es invertir en ellos. Esto no es simplemente un principio básico de justicia; también es sensatez económica.



① LA ESPECULACIÓN CON LOS PRODUCTOS BÁSICOS¹

La eclosión de los precios de los productos básicos entre 2002 y mediados de 2008 fue la más pronunciada en décadas. La disminución de los precios desde mediados del año 2008 destaca por su agudeza y el número de productos básicos afectados. El alza de los precios para una serie de productos básicos impone una pesada carga sobre muchos de los países en desarrollo que dependen de las importaciones de alimentos y energía y ha contribuido a la crisis alimentaria en numerosos países durante 2007-2008. De la misma manera, la caída de los precios en el segundo semestre de 2008 fue una de las principales vías por las que la drástica desaceleración de la actividad económica y financiera en los principales países industrializados fue transmitida al mundo en desarrollo.

El fuerte y sostenido aumento de los precios de los productos básicos entre 2002 y mediados de 2008 fue acompañado por una creciente presencia de inversores financieros. Esta “financiarización” de los mercados de artículos de consumo ha suscitado preocupaciones respecto a que muchas de las evoluciones recientes de los precios de productos básicos – y especialmente el excesivo aumento de 2007-2008 y el severo retroceso ulterior – hayan sido impulsadas fundamentalmente por el manejo que los inversores financieros hicieron de los bienes de consumo como forma de activo.

② LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN Y LA “ECONOMÍA DE CASINO”

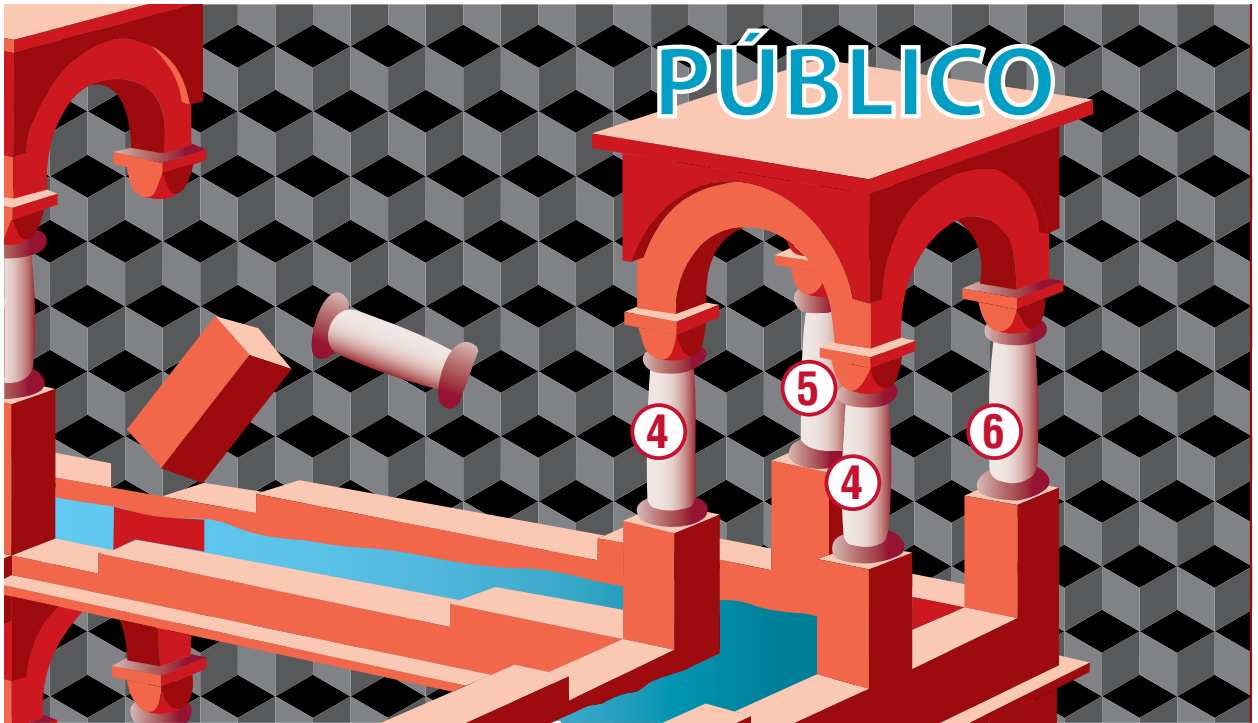
El sentido común y las matemáticas básicas dicen que no se puede hacer dinero de manera sustentable apostando en un casino. De la misma manera, no hay mercado en el que pueda todo el mundo ganar por encima de la media de beneficios, y ninguna inversión financiera puede pagar en el largo plazo más que las actividades económicas reales en las que se basa. Sin embargo, como los inversores insisten en creer que pueden desafiar las leyes de la gravedad, enormes cantidades de ahorros fueron atraídos por los fondos de compensación y otros “instrumentos financieros innovadores”, respaldados por irresponsables calificaciones de crédito triple-A. Por un tiempo, los mejores rendimientos alcanzados por los fondos de compensación llegaron a costa de un mayor riesgo. Este mayor riesgo es generado por el uso del leverage – o apalancamiento, el grado en que un inversor está utilizando dinero prestado –, a menudo en varias capas. En este sentido, los inversionistas podrían endeudarse para invertir en fondos de fondos, los cuales, a su turno, piden prestado para invertir en fondos de compensación que, a su vez, utilizan derivados para apalancarse a ellos mismos.

Toda esta pirámide, no del todo diferente a los fraudulentos “esquemas de Ponzi” de Bernard Madoff, cayó como un castillo de naipes en septiembre de 2008 y, con ella, la creencia de que la liberalización no regulada y el no intervencionismo por parte de los Estados aportaría prosperidad.

③ AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA

Finch, Moody’s y Standard y Poor’s, entre otras, son empresas que asignan calificaciones de bonos y otras obligaciones de deuda emitidas por grandes empresas o gobiernos y comercializadas en el mercado. Los “documentos” riesgosos pagan más intereses, mientras que las obligaciones calificadas como AAA pagan menos, pero se las supone seguras. Los inversores a largo plazo, como los fondos de pensiones, son frecuentemente obligados por ley a comprar exclusivamente papeles calificados como AAA. Las agencias de calificación crediticia fracasaron por completo, como lo ha demostrado la crisis financiera de las hipotecas sub-prime en Estados Unidos, y muchas inversiones calificadas como seguras resultaron de hecho sin ningún valor. Con la caída de Wall Street en septiembre de 2008, se estima que fueron “destruidos” 50 billones de dólares de riqueza en la medida en que ahorros en acciones, fondos de inversión y otras obligaciones perdieron drásticamente su valor. La Comisión del Mercado de Valores del Gobierno de Estados Unidos está investigando las prácticas anticompetitivas de estas tres agencias de calificación crediticia y los conflictos de intereses, ya que estaban calificando la deuda de las mismas empresas que eran la fuente de gran parte de sus ingresos.

¹ (Extraído del Informe de la UNCTAD La Crisis Económica Mundial, 2009)



4 EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO MUNDIAL²

La cumbre de Londres del G20 (un grupo ad hoc de los 22 países económicamente más poderosos) prometió reparar la economía mundial tomando medidas en áreas cruciales como el restablecimiento del crecimiento, el empleo, la confianza y los préstamos, el fortalecimiento de la regulación financiera, la financiación y la reforma de las instituciones financieras internacionales (IFIs), rechazando el proteccionismo y buscando la recuperación a través de una economía verde. Sin embargo, el único compromiso financiero notorio fue anunciar la inyección, por diversas vías, de 1,1 billones de dólares en el FMI, el Banco Mundial (BM) y bancos regionales de desarrollo.

Debido a la notoria falta de consenso político entre los principales miembros del G20, el único acuerdo sobre una acción inmediata fue aumentar los recursos de las instituciones financieras internacionales, cuyas decisiones, desde su creación, han sido controladas por Estados Unidos y los países europeos. Sin embargo, los beneficios de este importante aumento de la financiación – particularmente para el FMI, que estará dotado de un extra de 750.000 millones de dólares – no puede compararse a las potenciales repercusiones positivas de un estímulo fiscal coordinado. Como han señalado los expertos en economía, los fondos del FMI solo ayudan a las economías del mundo si los países obtienen préstamos del Fondo, mientras que los esfuerzos de los incentivos fiscales refuerzan la demanda total global.

La decisión del G20 de canalizar fondos predominantemente a través del FMI, en lugar de proponer una asignación de fondos más diversa acepta los mecanismos para imponer a los países en desarrollo el mismo tipo de políticas procíclicas y de contracción que contribuyeron a crear la crisis.

La renovación, tanto del capital del FMI como del BM, se realiza sin ninguna reforma previa de los requisitos para las instituciones. En su lugar, las únicas reformas clave descritas implican poner fin al monopolio Europa-Estados Unidos en la dirección de ambas instituciones y las reformas de gobernanza para aumentar las cuotas y participación de los países en desarrollo que, sin embargo, no serán examinadas e implementadas, hasta 2011 (para el FMI) y 2010 (para el BM). Mientras que se salen con la suya sin profundizar los requisitos de reforma, el Fondo y el Banco casi siempre exigen reformas de las políticas de sus países miembro prestatarios para la concesión de préstamos.

5 BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES (BIS)

Con sede en Basilea, Suiza, el BIS es mayormente ignorado por el gran público, a pesar de haber sido la primera organización financiera internacional, creada en 1930, y ser actualmente un pilar fundamental de la arquitectura financiera internacional. Como banco, el BIS solo proporciona servicios a sus miembros, los bancos centrales de 55 países desarrollados y de ingresos medios. Como “foro” informal es clave para acordar normas bancarias, que se elaboran a través del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria y del Foro de Estabilidad Financiera (FSF, por su sigla en inglés). La Cumbre del G20 elevó de categoría al FSF a una Junta

de Estabilidad Financiera (FSB, por su sigla en inglés), amplió su membresía a todos los países del G20 y le encargó el monitoreo de la estabilidad financiera mundial y la promoción de una reforma a mediano plazo. Algunos críticos temen que esta tarea viole la soberanía nacional, mientras que otros sostienen que el FSB carece de poder para lograr algo. En el pasado reciente, el BIS y sus Comités de Basilea han sido responsables de redactar las normas y códigos financiero-monetarios que fracasaron rotundamente en garantizar la estabilidad financiera.

6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)³

La actual Ronda de negociaciones comerciales de Doha incluye los servicios financieros. Los países desarrollados y sus instituciones financieras están presionando a un grupo de países en desarrollo para que abran sus mercados financieros, permitiendo, por ejemplo, el establecimiento de bancos extranjeros y dando libertad a los flujos financieros y de servicios transfronterizos. Si las negociaciones terminan con los lineamientos propuestos, los países en desarrollo tendrían que adoptar el tipo de liberalización financiera que los hace más vulnerables.

También significaría que los países que deseen acatar las políticas propuestas por la Comisión Stiglitz para regular flujos financieros, instituciones e instrumentos, podrían estar violando sus nuevos compromisos con la OMC. Es una paradoja que los líderes del G20 apelen simultáneamente a una mejor regulación de la financiación mundial y al “éxito de la Ronda de Doha”, lo que implicaría exactamente lo contrario.

2 (Extraído de un análisis de Bhumika Muchhala)

3 (Extraído de un análisis de la Red del Tercer Mundo)



7 FUGA DE CAPITALES⁴

Cada año los países en desarrollo pierden hasta 124.000 millones de dólares en ingresos provenientes de activos extraterritoriales que se encuentran retenidos en paraísos fiscales. Por lo menos 6,2 billones de la riqueza de los países en desarrollo es retenida offshore por individuos, lo que priva a los países en desarrollo de entre USD 64.000 millones y USD 124.000 millones por recaudaciones fiscales. Si el dinero trasladado por las empresas al exterior fuera incluido, esta cifra resultaría mucho mayor. Las pérdidas superan los 120.000 millones de dólares en ayudas al exterior que los países en desarrollo recibieron en 2008. Y la fuga de capitales es un problema creciente: USD 200.000 millones a USD 300.000 millones adicionales son cada año trasladados al exterior.

8 EL CRIMEN PAGA

La circulación transfronteriza de las ganancias globales provenientes de actividades delictivas, corrupción y evasión fiscal alcanza 1-1,6 billones de dólares por año, la mitad proveniente de economías en desarrollo y en transición. Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, ha encontrado pruebas de que “en muchas instancias, el dinero de la droga es el único

capital líquido de inversión” y, por lo tanto, el dinero producto del comercio ilícito de drogas ha sido utilizado para mantener a los bancos a flote durante la crisis financiera mundial.

9 EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO

Menos de un tercio de los países del mundo integran las instituciones de Basilea, pero sus decisiones se convierten en normas financieras internacionales de facto que se aplican en todas partes. La mayoría son países miembro de las instituciones de Bretton Woods, pero los votos son asignados por cuotas basadas principalmente en el poder económico relativo que disfrutaban hace décadas. Estados Unidos, con un 16% de los votos, tiene poder de veto, ya que las decisiones requieren de un 85% de los mismos. En la OMC cada país tiene un voto, pero las decisiones clave son tomadas por un “consenso” automático que da real poder de negociación a las principales potencias comerciales y deja impotentes a los países pequeños. En palabras de Amartya Sen: “la cuestión central en disputa no es la globalización en sí misma, ni el mercado como institución, sino la inequidad en el balance general de los arreglos institucionales, lo que provoca una distribución muy desigual de los beneficios de la globalización”.

10 PARAÍSO FISCALES

El impuesto, que es la base de un buen gobierno, es la clave de la riqueza o la pobreza de las naciones.

Pero los paraísos fiscales, que ofrecen secreto, bajos impuestos o ninguno, y reglamentos laxos (o una combinación de los tres) le permiten a las grandes empresas e individuos adinerados beneficiarse en sus países de residencia de los beneficios fiscales – como la buena infraestructura, educación y el estado de derecho – mientras utilizan el mundo offshore para evadir sus responsabilidades de pago, en tanto el resto del mundo lleva la carga sobre sus hombros. Cálculos efectuados por la Red Justicia Fiscal sugieren que alrededor de 11,5 billones de dólares de la riqueza privada de los “Individuos de Alto Poder Adquisitivo” es retenida en paraísos fiscales, en gran parte no declarados – y por consiguiente, probablemente desgravados – en sus países de residencia. Los beneficios de gravar solo esta riqueza individual – sin hablar de las sumas indudablemente mayores que se pierden mediante fraudes y evasiones fiscales de las corporaciones – superarían ampliamente cualquier aumento realista en los presupuestos de asistencia al desarrollo. El ingreso mundial anual que deviene de estos activos no declarados probablemente ronde los 860.000 millones de dólares. Gravar este ingreso a una moderada tasa del 30% produciría alrededor de 255.000 millones de dólares anuales, suficientes para financiar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en su totalidad. Puesto de manera sencilla, con solo hacer que los muy ricos paguen sus impuestos como corresponde se podrían financiar medidas para reducir la pobreza mundial a la mitad.

4 (Extraído de Oxfam International, “Tax haven crackdown could deliver USD 120 billion a year to fight poverty”)



11 REMESAS

Desde 1995, las remesas contribuyen con más dinero que todos los programas oficiales de asistencia al desarrollo combinados. En México, las remesas enviadas por los emigrantes se han vuelto indispensables para el 21% de las familias. Las remesas a México se redujeron casi en un 6% en enero de 2009, como resultado de la recesión de la economía de EEUU y las políticas contra los inmigrantes.

12 SOLO GOTAS DE AYUDA LLEGAN A LOS POBRES⁵

Hace casi 40 años, los países ricos acordaron dar un 0,7% de su PIB como ayuda oficial a los países pobres en asistencia para el desarrollo. El promedio de la ayuda que fue distribuida cada año jamás superó el 0,4% y el déficit se ha acumulado a más de 3,6 billones de dólares, mientras que el total de la ayuda distribuida en ese período alcanzó los 2,7 billones de dólares. Por otra parte, las cifras oficiales de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) tienden a incluir un alivio en la deuda y el apoyo a estudiantes y refugiados en los países donantes, distorsionando así el valor real de la ayuda solicitada: el desempeño

de AOD, excluyendo alivio de deuda y apoyo a estudiantes y refugiados, ha permanecido incambiado en el 0,22% del PIB en 2005, 2006 y 2007.

13 LAS MUJERES Y LOS POBRES SON LOS MÁS AFECTADOS

Los pobres del mundo están siendo duramente afectados por una crisis de la que no son responsables. Según estimaciones, en 2009, 53 millones de personas están cayendo en la extrema pobreza y de 200.000 a 400.000 bebés están muriendo debido a la caída del crecimiento. Las mujeres se ven afectadas desproporcionadamente. Ellas son las primeras en perder sus puestos de trabajo y las últimas en recuperarlos, se les exige compensar la reducción de los servicios de salud y educación prestados por los gobiernos y sufren un aumento de la violencia doméstica proporcional al del desempleo.

Los países de bajos ingresos enfrentan un déficit financiero de 270.000 a 700.000 millones de dólares en 2009. Sin embargo, mientras se encontraron más de 2 billones de dólares para impulsar a las economías del Norte y a los mercados emergentes, los países más ricos asignaron algo más de un 5% de la financiación adicional para el desarrollo que es necesaria para compensar a los países de bajos ingresos. Los países

africanos se enfrentarán solos a una disminución real de los ingresos de 49.000 millones de dólares entre el inicio de 2007 y fines de 2009. Ya duramente golpeados por el alza de los precios de los alimentos y la energía que dispararon el alza de la inflación, del mismo modo que causaron la escasez de alimentos y el hambre generalizada, los países pobres están viendo cómo baja la demanda de sus exportaciones y disminuyen remesas vitales enviadas por familiares que trabajan en el mundo desarrollado.

14 EL MAYOR PESO RECAE SOBRE LOS PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES EN PAÍSES POBRES

Si los países de bajos ingresos revisaran sus impuestos, fortalecieran sus administraciones financieras y suprimieran las exoneraciones fiscales para las inversoras transnacionales – con el objetivo de que la proporción de los ingresos públicos dentro del producto interno bruto (que era de 12% en 2003) se elevara al nivel promedio de los países ricos (26% en 2003) –, los ingresos de sus gobiernos aumentarían aproximadamente en unos 140.000 millones de dólares por año. ■

5 Fuentes: OCDE (abril 2009) y La realidad de la ayuda 2008.

Una respuesta a la crisis financiera y económica desde los derechos humanos

Aldo Caliori
Center of Concern (COC)

La magnitud de la crisis arroja una luz totalmente nueva sobre las consecuencias del enfoque tradicional de los derechos humanos y la regulación de las finanzas. Bajo este paradigma, se ha dicho a los defensores de los derechos humanos que los temas de la regulación financiera son estrictamente técnicos y deben dejarse en manos de los expertos, mientras que las políticas y preocupaciones sobre derechos humanos deberían ser abordadas independientemente de las cuestiones reguladoras financieras o, simplemente, circunscritas al enfoque que decidan darle los expertos financieros.

Al mismo tiempo, no es difícil encontrar apoyo a la noción de que, en todas partes, el goce de los derechos humanos se verá considerablemente afectado por la crisis.

Se espera que la pobreza aumente en 53 millones de personas en todo el mundo. Pero incluso esta cifra podría pecar de optimista, ya que se basa en la definición de pobreza ampliamente cuestionada del Banco Mundial y probablemente subestime la cantidad real de pobres. El empeoramiento del estado nutricional y de salud de los niños y niñas, que sufren deficiencias en el consumo de alimentos (por menor cantidad o peor calidad), puede ser irreversible. Las estimaciones sugieren que la crisis alimentaria ya aumentó en 44 millones el número de personas que padecen desnutrición.

En vista de estos impactos, y de acuerdo con el consenso sobre los orígenes de la crisis, es preciso concluir que las decisiones tomadas en cuanto a la regulación financiera tienen consecuencias tangibles para el goce de los derechos.

Una respuesta a la recesión financiera y económica que coloque las normas de derechos humanos en su centro no es sólo necesaria por una

cuestión de justicia; también hará que las reformas del sistema financiero y económico sean más sustentables y resistentes a futuras crisis.

Los principios de derechos humanos básicos incluyen la participación social, la transparencia, el acceso a la información, la protección jurídica y la rendición de cuentas.

La ONU, como guardián del marco legal internacional, es el foro más apropiado y legítimo para discutir las reformas necesarias para reestructurar el sistema económico y financiero internacional teniendo como fundamento los derechos humanos.

Deberíamos esperar una herencia sombría de la crisis financiera en curso, más que la de cualquier otra crisis que la generación actual haya visto. Pero junto a esto, hay una herencia de ideas importantes que ya no pueden ser desdeñadas y que deberían ser el núcleo de la reestructuración del sistema económico mundial. ■

Igualdad de género y crisis financiera

Nancy Baroni
Canadian Feminist Alliance for International Action
Mirjana Dokmanovic, PhD
Association Technology and Society, Serbia
y Women in Development Europe (WIDE)
Genoveva Tisheva
Bulgarian Gender Research Foundation y
Bulgarian-European Partnership Association
Emily Sikazwe
Women for Change

Las mujeres en el mundo en desarrollo son las más perjudicadas debido a la crisis financiera. Su control sobre la propiedad y los recursos es más débil, son mayoría en los empleos vulnerables o a destajo, ganan menos y tienen menor protección social; es por eso que, junto a sus hijos e hijas, las mujeres son más vulnerables a la crisis financiera.

Los enfoques gubernamentales al tratamiento de la crisis económica y financiera no están, en su

mayoría, basados en principios de igualdad o de derechos humanos.

Las reacciones ante la crisis económica implican reducciones de la financiación para los mecanismos de igualdad de género y la implementación de legislación sobre la materia, lo que pondrá en peligro los logros obtenidos e inevitablemente reforzará los estereotipos existentes.

En la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto en el Desarrollo (24-26 de junio de 2009), el Grupo de Trabajo de Mujeres recordó a los Estados Miembro de la ONU que las mujeres no pueden esperar, y que es éste el momento para actuar sobre la reforma fundamental de la arquitectura financiera mundial. A pesar del unánime llamado a la acción de las organizaciones de la sociedad civil, el documento final de la conferencia no llenó las expectativas.

Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones y redes de mujeres, deman-

dan un enfoque del desarrollo basado en derechos. Una revisión de la implementación de este enfoque por parte de las agencias de la ONU muestra que puede ser eficaz en la erradicación de la pobreza, el desarrollo de la democracia y los derechos humanos y el apoyo a los grupos vulnerables, en particular las mujeres, para que participen en la toma de decisiones.

Sin embargo, hay una necesidad de mejorar este enfoque a fin de abordar con eficacia las necesidades de las mujeres y mejorar las relaciones de igualdad de género. Hay varios defectos derivados de la excesiva generalización, los débiles mecanismos de implementación y la aplicación insuficiente del concepto de derechos humanos.

Un análisis de género muestra que dicho enfoque implica desarrollar buenas herramientas analíticas para entender las desigualdades inherentes tanto a la economía de mercado neoliberal como a las relaciones de género. ■

La crisis mundial en el precio de los alimentos

Sophia Murphy
Institute for Agriculture and Trade Policy

Comenzando en 2005 y alcanzando su punto máximo en julio de 2008, muchos de los precios de los productos agrícolas alcanzaron sus niveles más altos en 30 años en los mercados mundiales.

Los pobres gastan más del 50% de sus ingresos en alimentos, mientras los más pobres gastan 80% o más.

La disminución de la oferta es frecuente en agricultura. Por lo general, un déficit de la oferta provoca un aumento de la producción por medio de precios más altos (más agricultores tienden a plantar la cosecha que alcanza los precios más altos).

Agua. La agricultura irrigada representa casi el 70% del uso de agua mundial. La agricultura irrigada produce el 40% de los alimentos mundiales en el 20% de las tierras agrícolas del planeta.

Reservas. Las reservas mundiales de alimentos se han reducido a la mitad desde 2002. Se estima que hoy día el mundo tiene reservas para aproxima-

damente dos meses, que es la protección mínima recomendada por la FAO en caso de interrupción del suministro.

Costos de producción. Los fertilizantes, el petróleo, los pesticidas y los precios de las semillas aumentaron muy abruptamente entre 2007 y 2008.

Sequía. Las sequías parecen ser más frecuentes y más extendidas hoy que en cualquier momento de la historia reciente, exacerbadas por la desertificación y la deforestación, por una deficiente planificación urbana y el uso excesivo de las reservas de agua subterránea.

Cambio climático. El cambio climático afecta las precipitaciones y las temperaturas, ambas vitales para la productividad agrícola.

Población. Cada año, se agregan otros 78 millones de personas a la población total de la tierra.

Dieta. Más importante aún, lo que la gente come está cambiando. Cada año, más personas comen como los occidentales ricos.

Biocombustibles. Los biocombustibles (también llamados agrocombustibles) son combustibles líquidos fabricados con materias vegetales. La

mayoría de los biocombustibles comerciales de hoy se fabrican a partir de caña de azúcar, maíz, colza, aceite de palma o de soja.

Especulación. La mayor parte de los productos agrícolas se comercializan en bolsas internacionales.

Inversión. Los gobiernos en todo el mundo liberalizaron considerablemente las leyes sobre inversiones desde el advenimiento de los programas de ajuste estructural y la proliferación de los tratados comerciales regionales y bilaterales.

Comercio. Los tratados comerciales regionales y globales cambiaron el modo en que los precios mundiales se relacionan con los mercados de alimentos internos.

El fracaso en la erradicación del hambre es el resultado de opciones políticas. Sabemos cómo practicar una agricultura más sustentable. Sabemos regular mejor los mercados. Sabemos que la seguridad alimentaria debe construirse partiendo de una base local fuerte. ■

Justicia para enfriar el planeta

PRRM/Social Watch Filipinas
Isagani R. Serrano

En la década de 1880, luego de que comenzamos a utilizar combustibles fósiles e instalamos la sociedad industrial actual, la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera equivalía a 280 partes por millón (ppm). En los años 1950 había llegado a 315 ppm. Cuando el científico de la NASA James Hansen lanzó por primera vez la voz de alerta sobre el cambio climático a fines de la década de 1980, fijó 350 ppm como el nivel más alto posible "si la humanidad desea preservar un planeta similar al que permitió el desarrollo de la civilización y en el cual se adaptó la vida en la Tierra".

Entre tanto, crecen los indicios de que el peor de los escenarios posibles podría ocurrir antes de lo imaginado. Hechos extremos tales como tormentas, inundaciones y sequías tienen consecuencias devastadoras para los recursos hídricos,

la seguridad alimentaria, la agricultura, los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana.

Un mundo más equitativo tiene mejores posibilidades de sobrevivencia y adaptación al cambio climático. El mundo sería más resistente si se fijaran límites al crecimiento (más allá de que se haya traspasado los umbrales temidos o no) y se estableciera la equidad entre y dentro de los países y las comunidades, entre los hombres y las mujeres, entre las generaciones actuales y futuras.

El cambio climático no perdona a nadie, ni a ricos ni a pobres, pero tiene consecuencias peores sobre la población pobre, aunque su responsabilidad en el tema sea menor.

La solución para evitar la catástrofe es lisa y llana: los ricos de los países ricos y pobres deben ceder mucho más para que los pobres y el resto de nosotros podamos vivir de manera sostenible.

Los países con altas emisiones deben comprometerse a realizar recortes drásticos, profundos y vinculantes de sus emisiones de GI, en comparación con los niveles de 1990, y ayudar

a los países en desarrollo con dinero "blando" y tecnología limpia.

Los países en desarrollo tienen derecho al desarrollo, pero este derecho no debe tomarse como un permiso para contaminar el medio ambiente.

La agricultura y la pesca sostenible, la forestación y la gestión de cuencas hidrográficas sostenibles y la gestión ecológica de los recursos son vías de adaptación que pueden ayudar a enfriar el planeta. La seguridad alimentaria exige un cambio radical en la agricultura, una opinión que defienden desde hace tiempo los movimientos de productores agrícolas de todo el mundo.

Paradójicamente, es posible que la recesión mundial actual termine siendo un beneficio. Quizás cuanto más profunda sea y más dure, mejor para todos y todas. Un menor crecimiento implica menos emisiones y menos presión sobre el medio ambiente. Una producción más limpia y la reducción universal del consumo *per cápita* implican una huella de carbono menor y – quizás – una forma de vida más sana. ■

Las obligaciones de las empresas transnacionales frente a los derechos humanos y el papel de la sociedad civil

Jana Silverman
Social Watch
Alvaro Orsatti
Confederación Sindical de Trabajadores
y Trabajadoras de las Américas

Generalmente, las empresas – en particular las compañías transnacionales – son entidades privadas no gubernamentales, sujetas solo a las leyes nacionales del país donde está su sede central o a las de aquellos en los que posee inversiones.

Sin embargo, en la práctica, esta interpretación está siendo gradualmente revisada.

Hoy en día, las obligaciones referidas a promover y proteger los derechos humanos se están volviendo, tanto en la teoría como en la práctica, más explícitas para los actores no estatales – como las empresas comerciales.

Además, cada vez más compañías diseñan y ponen en práctica políticas específicas sobre derechos humanos. Según el Centro de Información

Sobre Empresas y Derechos Humanos, más de 240 empresas han formulado sus propias pautas y más de 5.200 compañías están listadas como miembros activos del Pacto Global de la ONU, una iniciativa multisectorial que compromete a las empresas a respetar los principios universales relativos a los derechos humanos, laborales y ambientales y a las prácticas anticorrupción.

La cambiante relación entre las empresas y los derechos humanos está estrechamente unida al surgimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), definida por la Comisión Europea como un “concepto por el cual las empresas integran, en forma voluntaria, la temática social y ambiental en sus operaciones comerciales y en sus interacciones con otros actores interesados”. Aunque desde al menos los años 1950 algunas compañías hayan puesto en práctica programas filantrópicos para beneficiar a sus empleados, comunidades locales y sociedad en general, el concepto actual es diferente. Éste promueve la incorporación de los derechos humanos, sociales y ambientales como parte integral de las

estrategias empresariales, no con el fin de cumplir un imperativo moral o ético, sino simplemente como una buena práctica empresarial que puede minimizar los riesgos y mejorar el desempeño de la compañía.

La experiencia de los sindicatos en el uso de instrumentos de RSE está basada en una estrategia que fue definida previamente por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en el campo internacional. Esta estrategia establece que las compañías tienen “una responsabilidad interna” hacia sus trabajadores que debería ser regulada y obligatoria. Los mecanismos para llevarla a cabo incluyen la Declaración Tripartita de la OIT, las Directrices OCDE sobre Multinacionales y los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) negociados entre las Federaciones Sindicales Internacionales y las empresas multinacionales.

Aunque no todos los mecanismos presentados anteriormente sean igualmente eficaces para proteger y promover los derechos humanos y laborales fundamentales que las empresas están obligadas a mantener, al menos comienzan a abordar las debilidades inherentes al modelo unilateral y voluntario de la RSE. ■

La crisis económica mundial y los países menos adelantados: preocupaciones ciudadanas

Arjun Karki
LDC Watch

De acuerdo con la definición de la ONU, en el mundo hay 49 Países Menos Adelantados (PMA), que suman una población de aproximadamente 750 millones de personas.

La actual crisis económica mundial no sólo sacudió los cimientos de las economías más poderosas, las bolsas de valores y las instituciones financieras más influyentes de todo el mundo, sino que también puso en peligro las pequeñas y ya frágiles economías de los PMA, y empujó a millones de mujeres, hombres y niños pobres a la pobreza y las privaciones.

La crisis alimentaria sin precedentes provocada por la enorme suba de los precios, causó varios “disturbios por alimentos”, que sacudieron más de 30 PMA, donde los trabajadores y los campesinos ya no pueden comprar los alimentos básicos para sobrevivir. Las protestas por los precios de los granos

en, Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Haití, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Senegal y otras partes de África y una marcha de niños hambrientos en Yemen son algunos ejemplos.

Debido en los PMA la mayoría de las personas pobres gasta el 70-80% de sus ingresos en alimentación sufre enormemente los drásticos aumentos de los precios de los alimentos básicos.

Las preocupaciones de los PMA por los alimentos, el agua y la seguridad energética se agudizan aún más por la crisis climática que pone en peligro los objetivos de crecimiento económico inclusivo y ambientalmente sustentable.

También se pronostica que los flujos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hacia los PMA se reducirán debido a que los gobiernos de los países desarrollados están desviando recursos para estimular sus propias economías y seguir rescatando las instituciones financieras que han sido el centro de la crisis económica.

Las remesas hacia los PMA de las personas que trabajan en otros países también están disminuyen-

do a raíz de que los trabajadores migrantes pierden sus empleos a causa de la recesión económica en los países donde residen. El FMI predice una caída de entre 4% y 8% para 2009.

Estas circunstancias, que empujan a millones de personas en los PMA hacia una mayor pobreza y vulnerabilidad, exigen acciones inmediatas y urgentes. Para superar la crisis económica mundial y crear un ambiente propicio al desarrollo en los PMA, es crucial que la comunidad internacional y los gobiernos PMA pongan de acuerdo para combatir juntos los impactos de la crisis económica en esos países.

Esto sólo se logrará con una transformación fundamental de la arquitectura financiera mundial. Si pretendemos alcanzar los objetivos a los que todos proclamamos aspirar, debemos asegurarnos de que el trabajo que realizamos para aliviar las consecuencias de la crisis económica mundial sea una oportunidad para alcanzar una verdadera transformación del sistema global, de modo que cada persona tenga una vida significativa y segura. ■

Aumentan los desafíos de desarrollo debido a la crisis mundial: opción de políticas en la región árabe

Kinda Mohamadieh
Arab NGO Network for Development
Oliver Pearce
Christian Aid

La crisis económica y financiera mundial llega en momentos en que los países y los ciudadanos de la región árabe están intentando adaptarse a los precios descontrolados de los alimentos y el combustible.

Las crisis económicas del pasado tuvieron impactos desproporcionados sobre los pobres y, en ese sentido, ésta no será diferente. Esto se traduce en un mayor estrés para las comunidades que ya están sufriendo el cambio climático y las fluctuaciones de los precios de la energía y los alimentos.

La región árabe fue testigo de una sensible reducción de los niveles de pobreza desde los años 1980 hasta principios de los 1990. A mediados de esta década, sin embargo, el porcentaje de personas

que vivían en la pobreza – considerando las líneas de pobreza más básicas de USD 1 y USD 2 al día – se elevó y, en términos generales, permaneció estancado al entrar al siglo XXI, con solo un declive muy gradual.

Además, si el umbral de pobreza se sube un poco – por ejemplo, de USD 1 a USD 2 por día o de USD 2 a USD 3 o 4 por día – las cifras aumentan considerablemente.

Las medidas relacionadas con los umbrales de pobreza más altos importan en particular ahora que las familias en toda la región tuvieron que absorber los mucho más altos costos de los bienes básicos, incluyendo alimentos y combustible, que representan gran parte de sus gastos. Fuentes de la ONU afirman que, a causa de la crisis alimentaria, alrededor de 31 millones de personas en la región árabe pasan hambre (aproximadamente el 10% de la población total).

El alto grado de desigualdad entre los países, así como las desigualdades persistentes dentro de

muchos de ellos, es otro rasgo notable de la región a ser tenido en cuenta.

Uno de las causas del alto porcentaje de pobreza en la región es el desempleo crónico. De hecho, incluso en los años en que las economías crecían y los ingresos individuales también parecían crecer, el desempleo era alto e iba en aumento.

La crisis ha expuesto la naturaleza fluctuante de la ayuda y las remesas como también los beneficios limitados de la liberalización comercial. Estas opciones políticas no pueden considerarse factores estables sobre los que se pueda construir una política de crecimiento sustentable a largo plazo.

Al ampliarse los tratados comerciales regionales y bilaterales, las tarifas comerciales se redujeron considerablemente en casi todos los países de la región: la mayoría de las barreras no tarifarias se eliminaron o se redujeron significativamente.

Es evidente que los gobiernos árabes necesitan priorizar cambios estructurales a largo plazo y abordar las necesidades a corto plazo, a la luz de la crisis. ■

Respuesta europea a la crisis económica y financiera mundial

Mirjam van Reisen
Europe External Policy Advisors (EEPA)
Simon Stocker, Louisa Vogjajides
Eurostep

Los líderes europeos reconocen de buena gana que ha habido fallas en el sistema financiero global. Sin embargo, parece que las medidas que prevén para combatir esas fallas están muy lejos de comportar una transformación radical del sistema.

La posición de la UE ciertamente incluye el compromiso de fortalecer la supervisión y regulación financiera, con varios niveles de apoyo para mejorar el monitoreo de las agencias de evaluación de créditos, el establecimiento de estándares regulatorios para poner fin a los paraísos fiscales y el secreto bancario, la necesidad de nuevas normas de contabilidad para colocar los bonos bajo contralor.

En los últimos años, la creciente desregulación financiera y las privatizaciones pusieron en riesgo el

Modelo Social Europeo. En el nuevo paradigma, el bienestar de los ciudadanos queda a cargo, cada vez más, del mercado, lo que resulta en un progresivo retroceso del Estado de diversas esferas sociales y económicas.

La recesión económica resultante de la crisis amenaza aun más el enfoque europeo del bienestar social.

¿Cuál es la respuesta de Europa? Desde el comienzo de la crisis la Comisión Europea y sus Estados Miembro han tomado una serie de medidas para contrarrestar los efectos del declive económico, principalmente mediante planes de recuperación y paquetes de rescate que, en su mayor parte, se enfocaron en el sector financiero.

La creciente crisis de desempleo sugiere que los impactos sociales de la crisis exigen ser abordados con mayor energía. Son necesarias diversas medidas para integrar a aquellos que se encuentran excluidos del mercado de trabajo, invertir en servicios sociales y de salud y mejorar los sistemas de protección social.

La UE también reclama un papel protagónico en los esfuerzos para aliviar los efectos sociales de la crisis en los países en desarrollo. Según el presidente de la CE Barroso, “Europa ha asumido el liderazgo para asegurar que el G-20 sienta las bases para la recuperación justa y sustentable de todos, incluyendo los países en desarrollo”.

Otro impacto de la crisis sobre la relación de Europa con los países en desarrollo parece ser el impulso de medidas controversiales como el apoyo presupuestario y la conclusión de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE).

A pesar de estas preocupaciones, la CE sostiene que, en la crisis actual, los AAE contribuirán a promover el crecimiento económico y el desarrollo en los países socios. João Aguiar Machado, uno de los principales negociadores de la CE sobre los AAE, explica que los acuerdos apoyarán al desarrollo al crear un ambiente comercial predecible que, a su vez, impulsará las inversiones y creará empleos. ■

Social Watch: la promoción de la responsabilidad

Social Watch, una red que hoy cuenta con miembros en más de 60 países de todo el mundo, fue creada en 1995 como un “punto de encuentro de organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género”, respondiendo a la necesidad de promover la voluntad política requerida para hacer realidad las promesas de las Naciones Unidas. Desde entonces, esta red, que crece continuamente tanto cualitativa como cuantitativamente, ha publicado 14 informes anuales sobre los avances y los retrocesos en la lucha contra la pobreza y a favor de la igualdad de género, que han sido usados como herramientas de incidencia a nivel local, regional e internacional.

Desde el número 0, publicado en 1996, a la presente edición, la número 14, el Informe de Social Watch ha reunido a más de 600 informes de organizaciones de la sociedad civil, todos ellos compartiendo el objetivo de recordar a los gobiernos los compromisos asumidos y rastrear de manera independiente su implementación, país por país y en el plano internacional.

La presente edición, que contiene contribuciones de 61 organizaciones nacionales, mantiene la llama encendida en el momento de la creación de la red en 1995: la necesidad de generar herramientas y estrategias que corrijan la falta de mecanismos de rendición de cuentas y aseguren el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con las políticas sociales y los objetivos de desarrollo.

En la década en que se creó Social Watch, una serie de conferencias de alto nivel de Naciones Unidas – comenzando por la Cumbre de los Niños en 1990 y concluyendo con la Cumbre del Milenio en 2000 – redefinió la agenda social internacional. En 1995, la Cumbre Social (en Copenhague) y la Conferencia de las Mujeres (en Beijing) definieron por primera vez la erradicación de la pobreza y la igualdad de género como objetivos universales en común y fijaron metas y cronogramas concretos para alcanzar la meta que la Carta de la ONU formulara vagamente en 1946 como “dignidad para todos”. Para fomentar la voluntad política necesaria para convertir esas promesas en realidad, Social Watch fue creada como “un punto de encuentro de organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género” (*Social Watch No. 0*, 1996), por un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

Así, el *Informe de Social Watch* se formuló como una poderosa herramienta para la presentación de información estadística disponible internacionalmente, que a la vez diera cuenta del aspecto cualitativo de los problemas abordados mediante el análisis realizado por organizaciones sociales que trabajan directamente con diversas problemáticas a nivel nacional. Desde entonces, Social Watch ha publicado informes anuales sobre los avances y retrocesos en la lucha contra la pobreza y en favor de la igualdad de género, dos objetivos en gran medida superpuestos, ya que la mayoría absoluta de las personas que viven en la pobreza son mujeres.

Los informes anuales de Social Watch, al tiempo que agregan una dimensión internacional a los esfuerzos y campañas locales, se convirtieron en la primera iniciativa sustentable de monitoreo a nivel

nacional dedicada al desarrollo y la equidad de género, y la primera en combinar ambos enfoques dentro de una perspectiva internacional.

El número 0 del Informe, publicado en 1996, incluía las contribuciones de 13 organizaciones; desde entonces, la red ha crecido de forma constante. Actualmente, Social Watch tiene miembros (“watchers”) en más de 60 países en todo el mundo, y su membresía crece todos los años.

Una red flexible

El “punto de encuentro” ha crecido y se ha transformado en varios aspectos, pero manteniendo siempre las ideas y objetivos que acompañaron su fundación. En el proceso preparatorio de la Cumbre Social de Copenhague, las organizaciones de la sociedad civil adoptaron formas *ad hoc* flexibles de organizarse como red. No se crearon estructuras formales ni se estableció un comité de dirección o grupo coordinador estable. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) prefirieron coordinar las acciones en espacios horizontales y abiertos, lo que para algunos analistas sentó un precedente para el formato organizativo

que asumiría luego el Foro Social Mundial. Varias de estas organizaciones formaron, y aún conforman, la espina dorsal de Social Watch, lo que hace que la estructura y funcionamiento de la red mantengan gran parte de la flexibilidad y apertura originales.

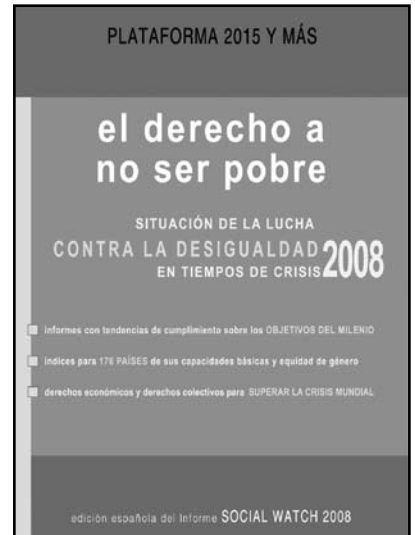
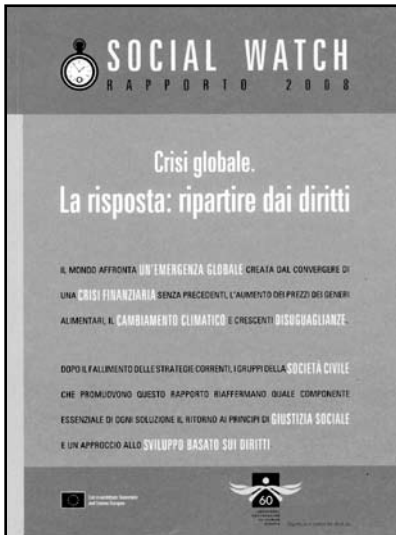
Además de las coaliciones nacionales, la estructura de la red tiene tres componentes centrales: la Asamblea General, el Comité Coordinador y el Secretariado Internacional. En los últimos años también se establecieron estructuras de coordinación regionales y subregionales, como un espacio de coordinación pero no necesariamente como una instancia intermedia para vincular lo local con lo global.

La red Social Watch no es una entidad constituida con personería jurídica y su punto de partida no fue la redacción de sus estatutos de funcionamiento. En cambio, se creó un Memorando de Entendimiento básico entre las coaliciones nacionales y la red, que funciona como marco, donde se establecen las expectativas para el trabajo en conjunto, respetando la autonomía de los miembros y la toma de decisiones democrática y horizontal. Uno de los principios

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GRUPOS NACIONALES Y LA RED SOCIAL WATCH

1. Las coaliciones deben estar basadas en el país y ser activas en los temas del desarrollo social en ese país (no exclusivamente académicos o consultores).
2. Su compromiso básico con la red internacional es aportar un informe nacional, con sus propias conclusiones y definiciones de prioridades, a ser incluido en la publicación anual.
3. Se espera que utilicen su informe nacional y el informe global en las actividades de cabildeo a nivel nacional.
4. Deben estar abiertas a incorporar a otras organizaciones y a trabajar activamente para ampliar el conocimiento sobre Social Watch y promover la participación de otras organizaciones.
5. Son responsables de recaudar fondos para sus actividades. Las coaliciones nacionales no dependen del Secretariado ni de otro organismo internacional de Social Watch para obtener sus fondos, y tampoco están obligadas a rendir cuentas de su situación financiera.
6. Cada coalición escoge su propia estructura organizativa.
7. Existe una incompatibilidad total entre ser miembro de Social Watch y ocupar puestos gubernamentales.
8. Deberá buscarse la cooperación con otras plataformas nacionales a nivel subregional, regional y global.

NOTA: El Memorando de Entendimiento se adoptó durante la I Asamblea General, realizada en Roma en 2000. Está disponible en: <www.socialwatch.org/es/acercaDe/asambleaRoma.htm>.



fundamentales que distingue a Social Watch de otras redes internacionales de la sociedad civil es que no existe una estructura central que provea de fondos a sus miembros. Esta lógica de funcionamiento evita no solo las tensiones asociadas a una relación de tipo donante/receptor al interior de la red, sino también la pérdida de energía en discusiones sobre fondos, presupuestos, informes y procedimientos, lo que ha fortalecido el sentimiento de pertenencia de los miembros.

Cada una de las Coaliciones Nacionales decide de la manera en que se organiza, de acuerdo a las condiciones en cada país. La membresía de Social Watch es muy diversa, incluyendo desde institutos o centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, sindicatos, grupos de mujeres, organizaciones rurales y otras. Dado que el informe internacional de Social Watch sólo puede dedicarle algunas páginas a cada país y está disponible exclusivamente en español e inglés, las coaliciones nacionales publican informes nacionales más extensos en Alemania, Benín, Brasil, Filipinas, India, Italia, Polonia, la República Checa, y la región árabe, en sus idiomas nacionales.

Asamblea General

La Asamblea General es el órgano máximo de dirección de la red. La discusión política y planificación estratégica de largo y mediano plazo se realiza en este espacio, que sirve como un foro para la toma de decisiones pero también como un espacio para reforzar el sentido de pertenencia y fortalecer la identidad y unidad de la red. Esta instancia tiene lugar cada tres años y hasta ahora se ha realizado tres veces, en Roma en 2000, Beirut en 2003 y Sofía en 2006¹. Además de fijar las prioridades para el media-

no y largo plazo e identificar las alianzas potenciales dentro de la estrategia de incidencia, la Asamblea elige a los miembros del Comité Coordinador a quienes se delega la coordinación y el liderazgo político entre asambleas.

Comité Coordinador

El Comité Coordinador (CC) es el organismo político central en el trabajo “cotidiano” de la red, con una estructura que necesita de una comunicación fluida y se instrumenta principalmente a través de una lista de correo electrónico, además de las reuniones cara a cara realizadas dos veces al año y conferencias telefónicas regulares para abordar temas específicos.

Dado que el CC tiene la tarea de “asegurar la visibilidad política y la participación de la red en espacios y procesos relevantes”², su integración busca la representación geográfica y el equilibrio de género pero también considera el aporte en términos de experiencia y capacidades que sus miembros pueden brindar al conjunto de la red. En general, las decisiones del CC han sido adoptadas por consenso, y las mismas son oportunamente informadas a los watchers. La participación constante de dos miembros del Secretariado como miembros *ad hoc* del CC asegura la coordinación entre los dos organismos. Al Secretariado le corresponde apoyar y llevar adelante las decisiones tomadas en este espacio.

Secretariado Internacional

El Secretariado es el principal organismo ejecutivo de Social Watch. La primera evaluación externa de la red (1995-2000) ya destacaba que “De los varios roles al interior de la red, el del Secretariado es el que más ha cambiado” (Hessini y Nayar, 2000). En sus

inicios la tarea del Secretariado se limitaba a garantizar la producción del Informe, pero evidentemente ha ido incorporando una serie de funciones nuevas resultantes del crecimiento de la red, incluyendo actividades de investigación, capacitación, promoción de campañas, y representación de la red en varios foros internacionales.

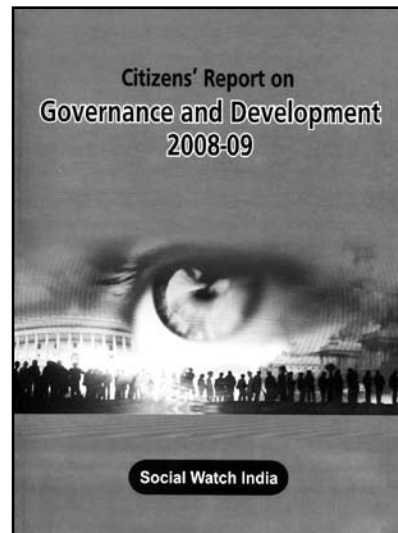
Lo local, lo global y el Informe

Cada año Social Watch analiza en profundidad un tema distinto a través del Informe, por lo general relacionado con los temas en discusión en la agenda internacional que pueden abordarse desde una perspectiva local. Expertos de distintos orígenes y disciplinas aportan visiones alternativas a los problemas a través de los artículos temáticos. Esta perspectiva internacional se complementa con la elaboración de los informes nacionales y regionales en los que las

1 Los Informes finales, documentos de base y otros materiales de estas tres Asambleas están disponibles en: <www.socialwatch.org>.

2 El documento que describe la naturaleza y el mandato del Comité Coordinador se acordó en la II Asamblea General de Beirut en 2003. Disponible en: <www.socwatch.org/es/acercaDe/beirut/documentos/SW_PrincipiosCC.doc>.





organizaciones que forman parte de la red aportan la visión local, informando sobre el estado de situación en sus países en relación al tema específico de cada año.

Además, Social Watch produce índices y tablas estadísticas con información comparable a nivel internacional que presentan una perspectiva macro de la situación en determinadas dimensiones del desarrollo, pero a la vez habilitando la lectura a nivel nacional. Social Watch ha desarrollado indicadores alternativos para medir los avances y los retrocesos en la equidad de género y en la satisfacción de las capacidades humanas básicas, usados actualmente como referencia tanto por la sociedad civil como por instituciones internacionales.

Si bien los miembros utilizan el informe para incidir en distintos ámbitos, uno de los momentos clave para la difusión son los lanzamientos, que tienen lugar no solo en espacios relevantes del debate internacional sino también en cada uno de los países, donde gran parte de la atención se vuelca a los resultados del capítulo nacional. Este año, algunos hallazgos preliminares del Informe 2009 fueron destacados en la publicación *Who Pays? The Global Crisis and What Needs to Be Done*,³ que fue presentada en Junio en Nueva York en la Conferencia de la ONU sobre la Crisis Financiera y Económica y sus Impactos sobre el Desarrollo, así como en la Audiencia Popular sobre la Crisis, un evento que reunió a más de 100 activistas de la sociedad civil mundial.

Se han publicado Cuadernos Ocasionales, principalmente con miras a la capacitación de las coaliciones miembros⁴, se han realizado varios ta-

lles de capacitación a nivel regional y producido varios documentos de referencia. Por ejemplo, este año Social Watch formuló recomendaciones sobre temas relacionados a la arquitectura financiera y su impacto sobre el desarrollo que fueron presentadas a la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de la ONU sobre Reformas al Sistema Monetario y Financiero Internacional. Además, a fin de compartir mejores prácticas en cuanto al trabajo de los grupos nacionales de Social Watch, se redactó y se divulgó la publicación *Aprendiendo de experiencias exitosas – Un resumen del análisis de cuatro estudios de caso sobre coaliciones nacionales de Social Watch*.⁵ Asimismo, a través de su página web, blog, y presencia en redes sociales virtuales, Social Watch también está utilizando nuevas herramientas multi-media para divulgar información sobre temas relacionados con género, desarrollo y derechos humanos, fomentar discusiones entre integrantes de la sociedad civil y transmitir ideas a políticos y periodistas. En varias oportunidades, voceros de Social Watch han hablado ante la Asamblea General de la ONU y otros organismos intergubernamentales en representación de la red o de sectores más amplios de la sociedad civil. ■

de la experiencia de democratización de los instrumentos internacionales de DDHH realizada en Chile en 1997. La tercera de estas publicaciones, compilada por Patricia Garcé y Roberto Bissio, introduce la experiencia de monitoreo de las metas de Copenhague a través del ejemplo concreto de Social Watch. Los Cuadernos 4 y 5, coordinados por el equipo de Investigación de Social Watch, abordan la pobreza y desigualdad en América Latina y los vínculos entre pobreza y DDHH. Los Cuadernos Ocasionales están disponibles en: <www.socialwatch.org/en/informelmpreso/cuadernosOcasionales.htm>.

3 Social Watch (2009) *Who Pays? The Global Crisis and What Needs to Be Done*, disponible en: <www.socialwatch.org/en/avancesyRetrocesos/poster09/index.htm>.

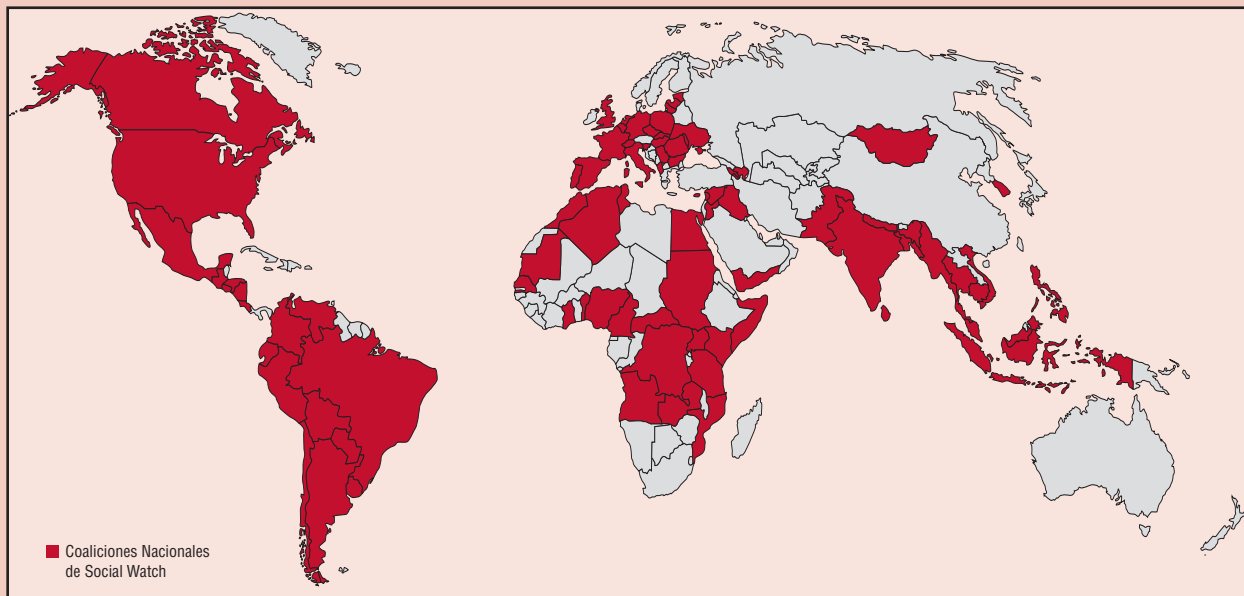
4 El primer Cuaderno Ocasional de Mirjam Van Reisen *Los dientes del león* aborda el contexto político que dio origen a la creación de Social Watch. El segundo, de Ana Ma. Artega, *Control ciudadano desde la base* realiza un análisis

5 Social Watch (2009) *Learning from Successful Experiences: Summary of the Analysis of Four Case Studies from the Social Watch National Coalitions*. Disponible en <www.socialwatch.org/en/informelmpreso/publicacion09.html>.

Referencias

- Friedlander, E. y Adams, B. (2006). *Informe de evaluación externa 2001-2005*. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/noticias/documentos/Evaluacion_Externa_SW.doc>.
- Hessini, L. y Nayar, A. (2000). *Un Movimiento hacia la Justicia Social. Informe de Evaluación*. Análisis Estratégicos para la Equidad de Género (SAGE). Nueva York. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/acercaDe/evaluacion.htm>.
- Social Watch No. 0 (1996). *Punto de partida*. Instituto del Tercer Mundo. Montevideo. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/informeImpreso/informe1996.htm>.
- Social Watch (2006). *Estrategia y Marco de Actividades 2007-2009*. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/noticias/documentos/Estrategia2007_2009_AGSofia2006.doc>.
- Van Reisen, M (2001). *Los dientes del león. La prehistoria de Social Watch*. Instituto del Tercer Mundo. Montevideo. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/informelmpreso/images/otrasPublicaciones/ZOOM_01_esp.pdf>.

Social Watch en el mundo



SOCIAL WATCH

COMITÉ COORDINADOR

Emily Joy Sikazwe (Zambia) y Jens Martens (Alemania), co-presidentes. Nancy Baroni (Canadá), Leonor Briones (Filipinas), Anas El Hasnaoui (Marruecos), Javier Gómez (Bolivia), Arjun Karki (Nepal), Thida Khus (Camboya), Edward Oyugi (Kenia), Iara Pietricovsky (Brasil), Ziad Abdel Samad (Líbano), Arell Sandoval (México), Alexandra Spieldoch (Estados Unidos de América), Genova Tisheva (Bulgaria), Mirjam van Reisen (Unión Europea) y Roberto Bissio (Uruguay, *ex officio*).

El Secretariado Internacional de Social Watch se encuentra en Montevideo, Uruguay, y tiene su sede en el Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

Redactor Responsable
Roberto Bissio

Editor
Amir Hamed

Producción
Ana Zeballos

Editores asociados
Karen Judd, Tina Johnson, Jon Steinberg

Asistentes de redacción
Gustavo Alzugaray, Enrique Buchichio

Equipo de Investigación en Ciencias Sociales del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay
Gabriel Errandonea (Coordinador)
Gabriel Gómez, Daniel Umpiérrez, Ruy Blanco

Coordinadora de Cabildeo
Natalia Cardona

Campañas y comunicaciones
Jana Silverman (Coordinadora)
Agustín Fernández

Traducción
Soledad Bervejillo, Marcela Dutra, Bachir El Omari, Ana Fostik, Susana Ibarburu, Emilie Jung, Richard Manning, María Laura Mazza, Alexandra Potts, Álvaro Queiruga, Alejandra Trelles

Apoyo técnico
Arturo González

Diseño y desarrollo Web
Andrea Antelo, Ximena Pucciarelli, Ernesto Rapetti

© Copyright 2009
INSTITUTO DEL TERCER MUNDO
18 de Julio 1077/903, Montevideo 11100, Uruguay
item@item.org.uy
Fax: +598 (2) 902 0490 int. 113

Hecho posible gracias al apoyo de la Unión Europea, Oxfam Novib y la Fundación Ford.



 Oxfam Novib

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea, Oxfam Novib y la Fundación Ford. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y de la red Social Watch y en ningún caso debe considerarse que refleje los puntos de vista de la Unión Europea, Oxfam Novib y la Fundación Ford.

Diseño maqueta original:
MONOCROMO

Diagramado:
FORMA ESTUDIO
www.formaestudio.com
Teléfono: +598 (2) 916 3273

Rediseño de infografía:
www.icodemon.com

Impreso en:
Gráfica Mosca

Impreso en Uruguay
Edición hecha al amparo del Art. 79 de la Ley 13.349
(Comisión del Papel)

Dep. Legal:

Por órdenes, pedidos y suscripciones comunicarse a:

Social Watch
Casilla de Correo 1539
Montevideo 11000, Uruguay
socwatch@socialwatch.org
www.socialwatch.org
Teléfono: +598 (2) 902 0490
Fax: +598 (2) 902 0490 int.113

El contenido de esta publicación puede ser reproducido por organizaciones no-gubernamentales con fines no comerciales (enviénnos copia, por favor).

Cualquier otra forma de reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación de datos, o transmisión por cualquier medio, con fines comerciales, requiere autorización previa de ITeM.

SENEGAL: La crisis medioambiental derivada del calentamiento global reduce la pesca (...) La pesca es una fuente importante de recursos para el sector primario y una de las principales fuentes de proteínas para la población.

PAÍSES EN DESARROLLO: Los pobres gastan más del 50% de sus ingresos en alimentos — los más pobres gastan 80% o más. La suba de los precios de los alimentos ha hecho crecer no solo la pobreza sino también el hambre.

ÁFRICA SUBSAHARIANA: ... las mujeres siguen siendo las primeras en perder sus empleos y se encuentran cada vez más limitadas al menudeo informal de verduras y tomates como mecanismo de supervivencia.

CAMBIO CLIMÁTICO: Los países menos desarrollados, que son los que menos aportaron a la contaminación, serán los que más sufran. Muchos pequeños países insulares en desarrollo podrían simplemente ser barridos del mapa.

PAÍSES MENOS DESARROLLADOS: La crisis alimentaria sin precedentes provocada por la enorme suba de los precios, causó varios “disturbios por alimentos”, que sacudieron más de 30 PMA, en los cuales los trabajadores y los campesinos ya no pueden comprar los alimentos básicos para sobrevivir.

REGIÓN ÁRABE: ... a causa de la crisis alimentaria, alrededor de 31 millones de personas en la región pasan hambre (aproximadamente el 10% de la población total).

BENÍN: ... alza generalizada de los precios (...) en el producto de mayor consumo, el maíz, llegó a un 220%.

CAMBOYA: Más del 90% de los trabajadores despedidos son mujeres provenientes de comunidades rurales ...

CANADA: ... las mujeres obtienen empleos precarios o de tiempo parcial y, con frecuencia, son las primeras en ser despedidas.

GHANA: El daño inicial ha incluido la reducción de exportaciones y remesas del exterior y una devaluación galopante.

INDIA: ... se ha frenado el crecimiento en préstamos personales, al consumo y a la producción.

MALASIA: ... la recesión venidera podría ser peor que la de 1997.

NICARAGUA: ... más de 400.000 niños podrían morir por causas evitables.

PERÚ: ... pérdida de 200.000 puestos de trabajo y una caída de la capacidad adquisitiva de los salarios y el ahorro de la población.

ESTADOS UNIDOS: ... muchos de aquellos suficientemente afortunados, propietarios de una vivienda, han perdido todo o la mayor parte de su capital, o están atrapados en hipotecas que actualmente exceden por lejos el valor de los inmuebles.

POLONIA: ... el crecimiento de la economía gris — informal — afectará más a las mujeres que a los hombres, siendo que ellas suelen tener empleos con baja remuneración, especialmente en el sector privado.

Descargue la versión completa de este informe o adquiera ejemplares en: www.socialwatch.org

Social Watch es una red internacional de organizaciones sociales que lucha por erradicar la pobreza y las causas de la pobreza, con el fin de asegurar una distribución equitativa de la riqueza y la realización de los derechos humanos. Nos comprometemos con la justicia social, económica y de género y enfatizamos el derecho de todas las personas a no ser pobres.

Social Watch exige a los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales que rindan cuentas acerca del cumplimiento de los compromisos nacionales, regionales e internacionales para erradicar la pobreza.